



La Amazonia: Luchas de las comunidades frente a viejas y nuevas amenazas

Boletín del WRM 269

Febrero 2024

[Acceda al boletín en el sitio web](#)

SUBSCRÍBETE

Tabla de Contenidos

NUESTRA OPINIÓN. Cumbre Amazónica: extractivismo y violencia bajo el nombre de “bioeconomía” y “sostenibilidad”.....	3
Cómo diferentes formas de extractivismo ‘verde’ provocan la destrucción de la selva amazónica.....	6
La lucha por la tierra en la Amazonía brasileña contra las empresas mineras y de palma aceitera.....	14
Incendios y agronegocios, motores de la deforestación en la Amazonía boliviana.....	22
Perú: Resistencia y organización comunitaria para la defensa de la selva.....	28
El Yasuní: Alcances de una victoria.....	34
Colombia: La “transición energética” pone en riesgo la cuenca noroccidental Amazónica....	37
Las contradicciones de la conservación: El territorio del pueblo Ka’apor, en la Amazonia brasileña.....	42
RECOMENDADOS.....	47
Pueblos Indígenas en aislamiento en Perú: Cómo el FSC aplica el manual de las grandes petroleras	
Brasil: Dossier de la articulación Agro es Fuego	
Voces indígenas de la Amazonia	

NUESTRA OPINIÓN

Cumbre Amazónica: extractivismo y violencia bajo el nombre de “bioeconomía” y “sostenibilidad”

Bajo el argumento de un “desarrollo sostenible”, los gobiernos de la región Amazónica siguen fomentando el extractivismo. En este contexto, la lideresa indígena Alessandra Munduruku afirma: "Hay que demarcar los territorios indígenas. Basta de hablar de bioeconomía, de sostenibilidad, cuando en la actualidad lo que hay es violencia"

Durante los días 8 y 9 de agosto de 2023, se celebró en la ciudad brasileña de Belém la Cumbre Amazónica, un inusual encuentro en el que se reunieron los presidentes de Brasil, Colombia, Perú, Bolivia, Ecuador, Venezuela, Guyana y Surinam para debatir los problemas de la región. En la agenda figuraba, entre otros temas, uno de los principales motivos que impulsaron la reunión: el reto urgente de combatir la deforestación.

Al final de la Cumbre, se publicó la Declaración de Belém, en la que los presidentes proponen dos líneas de acción. La primera es promover el “desarrollo sostenible”; la segunda es proteger la “integralidad” o la “conservación” de la Amazonía, con el objetivo de lograr la "deforestación cero" hasta 2030. En uno de los párrafos del documento, los presidentes afirman pretender “combatir la deforestación” y, a la vez, “erradicar y detener el avance de las actividades de extracción ilegal de recursos naturales” [el subrayado es nuestro].

Según este razonamiento, la Declaración parece sugerir que no hay problema si las empresas y otros actores que están detrás de la minería extractiva, la explotación petrolera, maderera y el agronegocio, así como de la construcción de las grandes represas hidroeléctricas, carreteras, ferrocarriles y puertos que son necesarios en un modelo, sigan operando legalmente, con sus licencias en vigor.

Ahora bien, la realidad de la Amazonía demuestra todo lo contrario. Los sectores mencionados, vinculados al modelo extractivista industrial, son notoriamente responsables de la deforestación. Cuando sus actividades se practican ilegalmente, lo que sucede es una agudización de sus impactos destructivos y violentos. Por otro lado, la Declaración de Belém ni siquiera menciona la responsabilidad que tienen esos sectores, y mucho menos se analizan sus graves impactos en los territorios de Pueblos Indígenas, comunidades ribereñas, tradicionales y campesinas.

La cruda realidad es que los gobiernos de la región amazónica, en nombre del “desarrollo sostenible”, siguen fomentando el extractivismo y, en consecuencia, no se comprometen a adoptar medidas estructurales para romper con este modelo como, por ejemplo, detener la extracción de crudo en la Amazonía –como lo propone uno de los presidentes que participaron en la reunión. En consecuencia, el propio uso del concepto de “desarrollo sostenible” se ha convertido en una causa subyacente e indirecta de la deforestación. Esto significa que cuando los mandatarios

reclaman más “desarrollo sostenible” en la Declaración de Belém, en la práctica también están reclamando más deforestación.

Actualmente, es difícil que un sector culpable de la destrucción en la Amazonía no se autodenomine “sostenible”: manejo “sostenible”, soja “sostenible”, palma aceitera “sostenible”, minería “sostenible”, todo se ha convertido en “sostenible”. Esos sectores también se valen de otros artificios, como los “sellos de calidad” de las certificaciones voluntarias de “sostenibilidad”.

Diálogos Amazónicos y la bioeconomía

En los días que antecedieron a la Cumbre, miles de personas, entre ellas miembros de comunidades indígenas, se reunieron en Belém para participar en un evento que se llamó "Diálogos Amazónicos", una iniciativa del propio gobierno brasileño para fomentar la participación de la sociedad civil en la Cumbre, según este. Sin embargo, los contenidos recogidos en las propuestas y planteamientos que las y los participantes entregaron por escrito no se incluyeron en la declaración final de la reunión.

Al mismo tiempo, lo que llamó la atención en estos “Diálogos” fue la fuerte presencia de grandes ONG conservacionistas que suelen presentarse en esos espacios para reforzar sus propios conceptos y nuevas narrativas. En Belém, se habló mucho de la “bioeconomía” y de la promoción del “bosque vivo”, en referencia a la propia Amazonía.

“Bosque vivo” es una expresión que suena bien, pero también rara. Después de todo, ¿cómo podría ser un bosque si no estuviera vivo? La expresión remite a otra, que esas mismas ONG han propagado: “bosque en pie”. “¿Bosque en pie?”, se preguntó un líder comunitario al oírla. “Jamás se me ocurrió que pudiera existir un bosque tumbado.”

El “bosque en pie” expresa bien la visión que los impulsores de la bioeconomía –las grandes transnacionales responsables de la destrucción de la Amazonía, así como las grandes ONG conservacionistas– tienen del bosque: una oportunidad para nuevos negocios. Por ejemplo, la venta de créditos de carbono que benefician a las empresas contaminantes, ahora “neutrales” en emisiones de carbono, al mismo tiempo que califican a sus “viejos” negocios extractivos como parte de la “economía verde”, con la producción de “biocombustibles” y la expansión de la minería para la “transición verde” de la economía.

Los impulsores de la bioeconomía buscan aliarse con gobiernos y grandes organizaciones de Pueblos Indígenas y comunidades tradicionales. Invitan a gobernantes y a representantes a reuniones a puerta cerrada y con poca participación. Por ejemplo, en enero de 2023, el gobernador del estado de Pará, Helder Barbalho, asistió al Foro Económico Mundial en Davos para presentar ante las élites del capital global el “Plan de Bioeconomía” de su estado –un plan elaborado por la propia ONG conservacionista TNC (1). En junio se celebró en Río de Janeiro la “Conferencia Panamazónica por la Bioeconomía”, en la que participaron, entre otros, representantes del Earth Fund, del multimillonario Jeff Bezos, el Banco Mundial, el WWF y también la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica - COICA (2). En

agosto, se celebró la “Conferencia Internacional Amazonía y Nuevas Economías”, que contó con el apoyo, entre otros, del gobierno del estado de Pará y de VALE (3), una de las compañías mineras más grandes del mundo, responsable de uno de los crímenes ambientales más graves de la historia de Brasil, que ocurrió en las ciudades de Brumadinho y Mariana, en el estado de Minas Gerais.

Aunque la Declaración de Belém no utiliza la palabra “bioeconomía”, esta resume perfectamente lo que pretenden imponer sus impulsores: más “desarrollo sostenible” con más “conservación” y siempre en busca de nuevas oportunidades de negocio.

“Basta de hablar de bioeconomía”

En la Declaración de Belem también se habla de "garantizar los derechos de los Pueblos Indígenas y de las comunidades locales y tradicionales, incluido el derecho a los territorios y tierras que habitan dichos pueblos, la posesión plena y efectiva". Pero los propios hechos que se produjeron en torno a la Cumbre no tardaron en poner en entredicho tal promesa.

En vísperas de la Cumbre, en el municipio de Tomé-Açu, a 200 kilómetros de Belém, dispararon contra cuatro indígenas Tembé durante dos enfrentamientos con guardias de seguridad de la empresa Brasil Biofuels (BBF). Los Tembé luchan para que el gobierno brasileño demarque su territorio, ocupado por BBF, una empresa que, con el total apoyo del Estado, cultiva y expande sus monocultivos con el objetivo de producir aceite de palma y biocombustible para la bioeconomía ([ver artículo en este boletín](#)).

Una de las participantes en los “Diálogos Amazónicos”, la lideresa Alessandra Munduruku, que forma parte de un pueblo que lleva años luchando por la demarcación de su territorio, sostuvo: “Hay que detener urgentemente esta violencia. Hay que demarcar los territorios indígenas. Basta de hablar de bioeconomía, de sostenibilidad, cuando en la actualidad lo que hay es violencia” (4).

La Declaración de Belém de 2023 es muy similar al Plan de Acción para los Bosques Tropicales (TFAP por sus siglas en inglés) presentado por el Banco Mundial y la FAO en 1986, que proponía acciones para promover el “desarrollo” y la “conservación” de los bosques a la vez. Vale la pena recordar que el TFAP fracasó y resultó en más destrucción forestal y más problemas para las comunidades que dependen de los bosques, a las que se culpó injustamente de la deforestación. Casi cuarenta años después del fracasado plan del Banco Mundial y sus aliados, la historia se repite, lo que señala que a los Pueblos Indígenas y a las poblaciones tradicionales de la Amazonía no les queda más remedio que seguir fortaleciendo sus luchas de articulación, integración y resistencia.

(1) Boletín WRM. [REDD y la Economía Verde agravan las opresiones y la deforestación en Pará](#), Brasil, julio 2023

(2) [Conferência Pan-Amazônica pela Bioeconomia reúne líderes e especialistas para debater formas de impulsar a bioeconomia na Amazônia](#), June 2019.

(3) [Conferência Internacional Amazônia e Novas Economias; Pará e mineração valorizam bioeconomia para promover desenvolvimento sustentável da Amazônia](#)

(4) [Na véspera da Cúpula da Amazônia, duas mulheres e um homem do povo Tembé são baleados no Pará.](#)

Cómo diferentes formas de extractivismo 'verde' provocan la destrucción de la selva amazónica

La región amazónica es una de las últimas fronteras de resistencia a la expansión del capital. Esto se expresa en las luchas de activistas sociales como Chico Mendes, así como por la presencia en la región de la mayoría de los pueblos indígenas del planeta que todavía se mantienen en aislamiento voluntario. Sin embargo, en la actualidad diferentes formas de extractivismo 'verde' avanzan cada vez más en este territorio.

Aún para quienes están lejos, la Amazonia atrae la imaginación. Después de todo, la región alberga la selva tropical y el río más grandes del mundo. El río Amazonas se extiende por ocho países, así como por el territorio de la Guyana Francesa, ocupado por Francia. Los afluentes del río Amazonas atraviesan varios países amazónicos. Algunos de ellos son los ríos Madeira y Tapajós, en Brasil; el río Madre de Dios, en Perú; el río Guainía, en Colombia; y el río Beni, en Bolivia. Alrededor de 385 grupos de Pueblos Indígenas habitan la región, así como la mayoría de los Pueblos Indígenas del planeta que permanecen aislados y rechazan el contacto con el mundo exterior.

Numerosos libros e ilustraciones han documentado la grandeza y diversidad de especies de la Amazonia. Y en los últimos años también han aparecido hermosas imágenes de la Amazonia en la propaganda de las empresas transnacionales –especialmente del Norte global– en un intento por demostrar preocupación por la selva amazónica. Sin embargo, detrás de estos llamativos materiales de colores brillantes se esconden diferentes formas de extractivismo 'verde' que provocan la actual destrucción de la selva amazónica.

Deforestación y degradación de los bosques en la Amazonia

Más de la mitad de la deforestación a gran escala en la Amazonia es causada por tres actividades específicas, que a menudo ocurren en conjunto: **la tala, el pastoreo de ganado y el agronegocio**. Esto explica por qué Brasil y Bolivia, donde se concentra la mayor parte de estas actividades, tienen las tasas de deforestación más altas, no sólo a escala regional sino también a escala mundial. Mientras tanto, la degradación de los bosques –un fenómeno causado, entre otras cosas, por la tala y períodos severos de sequía– recibe mucha menos atención que la deforestación. Esto a pesar del hecho de que la degradación de los bosques afecta negativamente a una zona mucho mayor que la deforestación a gran escala. Según un estudio publicado en 2023, alrededor del 38 por ciento del bosque que aún queda en la Amazonia está degradado (1).

La deforestación avanza más durante la estación seca, con la ayuda de miles de incendios de bosques. Estos incendios no son sólo desafortunados accidentes ambientales. En Brasil, por ejemplo, donde se encuentra el 60 por ciento de la selva amazónica, los incendios de los bosques son, ante todo, herramientas políticas que facilitan la apropiación de tierras públicas por parte de grandes agricultores, ganaderos y empresas del agronegocio. Después de talar el bosque se

construyen caminos para extraer la valiosa madera y llevarla a los mercados nacionales e internacionales. Esto permite a los ganaderos acceder a la zona y prender fuego a la tierra para plantar pasto. Después de que el pastoreo del ganado agota el suelo, las plantaciones de monocultivos de soja a gran escala a menudo se convierten en el siguiente uso de la tierra. El mismo patrón ocurre en Bolivia.

A lo largo de este proceso de deforestación y uso de tierras para pastoreo de ganado y/o producción de soja, los títulos de propiedad (con frecuencia falsificados) dan una apariencia legal a lo que es un proceso evidentemente ilegal. Las personas que habitan estas tierras, entre ellas las comunidades indígenas, tradicionales y/o ribereñas, a menudo son desalojadas de manera violenta, mientras son testigos de cómo la deforestación destruye sus medios de vida. Según Global Witness, en 2022, “uno de cada cinco asesinatos de defensores en todo el mundo tuvo lugar en la selva amazónica”, donde “la violencia, la tortura y las amenazas son una realidad compartida por las comunidades de toda la región” (2). Y son las empresas transnacionales del agronegocio y la industria de la carne quienes más se benefician de este proceso (3).

Desde que las potencias colonialistas invadieron la región, la **tala** destructiva de valiosas maderas tropicales ha sido un factor clave de la deforestación y degradación de los bosques en la zona. Mientras que en el pasado esta madera decoraba los palacios, iglesias y mansiones de las élites coloniales en Europa, hoy adorna los coches y barcos de lujo de las élites empresariales de Europa y otros lugares. La tala ‘verde’ se introdujo en la década de 1990 con el nombre de ‘Gestión Forestal Sostenible’ (SFM, por su sigla en inglés). Pero la experiencia de las comunidades que dependen de los bosques ha demostrado que la tala industrial, independientemente de cómo se practique, es inherentemente destructiva para sus medios de vida y sustento, así como para el bosque. A pesar de toda la propaganda en torno a la madera ‘verde’, la mayor parte de la tala sigue siendo ilegal. La Gestión Forestal Sostenible es funcional al proceso porque permite dar a la madera talada ilegalmente una apariencia legal mediante la práctica de mezclar madera talada legal e ilegalmente (4). En los últimos años, la extracción de madera de balsa se ha convertido en una nueva tendencia. Debido a su fuerte resistencia, esta madera se utiliza en la producción de molinos de viento en China. Esta tala en apoyo de la llamada ‘transición verde’ de la economía capitalista ha provocado otra ola de destrucción en la Amazonia ecuatoriana (5).

Después de que un bosque es talado para obtener su valiosa madera, el **pastoreo de ganado** suele ser la primera actividad introducida en la región amazónica. Mientras que otros países con enormes zonas de bosques tropicales, como la República Democrática del Congo o Indonesia, tienen casi todos los mismos factores de deforestación que la Amazonia (como la tala y la minería), el pastoreo de ganado no es un factor clave en esos lugares. Sin embargo, en la Amazonia es, sin duda, una de las mayores causas directas de deforestación, en particular en Brasil, Bolivia, Perú y Colombia. El pastoreo de ganado no sólo es una actividad lucrativa para los grandes terratenientes sino que también suele ser la única oportunidad que ven los pequeños agricultores; por lo tanto, también lo practican, ya sea como participantes en planes de colonización estatal o como inmigrantes que simplemente intentan sobrevivir. Son estos pequeños agricultores en particular a quienes se culpa de la deforestación en los numerosos informes oficiales elaborados por gobiernos, empresas consultoras, bancos y ONG conservacionistas sobre

el ‘problema de la deforestación’ en la Amazonia. Mientras tanto, los grandes ganaderos y sus inversores, responsables de la mayor parte de la deforestación a gran escala, suelen ser elogiados por sus iniciativas ‘verdes’ que supuestamente están deteniendo la deforestación. Pero por detrás de la propaganda continúa esta actividad destructiva aunque muy rentable.

Junto con el pastoreo de ganado, **el agronegocio de los monocultivos como soja, maíz, arroz, palma aceitera y caña de azúcar** es la otra principal causa directa de destrucción de la selva amazónica. La soja es el cultivo más importante, con millones de hectáreas de plantaciones en Brasil y Bolivia. Mientras tanto, las plantaciones de palma aceitera se expanden en la región amazónica de Ecuador, Colombia, Perú y Brasil. También hay planes para expandir la palma aceitera en la Amazonia boliviana. [Un artículo de este boletín](#) denuncia la violencia y opresión que enfrentan los pueblos indígenas, las comunidades quilombolas y las comunidades campesinas por parte de dos grandes empresas de palma aceitera en el estado de Pará. El artículo describe los impactos de esta actividad así como la organización y la lucha de las comunidades por recuperar sus tierras.

En una región cada vez más seca debido al cambio climático, el agua se ve especialmente afectada por los monocultivos a gran escala de soja, maíz y palma aceitera. Una zona mucho mayor que la de las plantaciones se ve afectada no sólo por el consumo masivo de agua que exigen estas actividades sino también por la contaminación del agua con agrotóxicos. La investigadora brasileña Larrissa Bombardi califica de ‘colonialismo químico’ cuando los países europeos que controlan un tercio de las ventas mundiales de agroquímicos venden a Brasil agrotóxicos que están prohibidos en sus propios países. Brasil actualmente es el principal importador mundial de agroquímicos. Según Bombardi: “Si pensamos que lo clásico del colonialismo es la violencia física, la expulsión de los pueblos, vemos que esto sucede ahora con los pueblos indígenas cuando, por ejemplo en los conflictos por la tierra, son bombardeados con agrotóxicos” (6).

La **minería** es otra gran causa directa de la deforestación, en particular en países como Brasil, Venezuela, Colombia, Bolivia, Surinam, Guyana y Perú. Las concesiones para minería industrial abarcan el 18 por ciento de la región amazónica. Las actividades mineras para extraer cobre, estaño, níquel, mineral de hierro, bauxita, manganeso y oro avanzan hacia el interior de la Amazonia. Actualmente, las compañías mineras y los gobiernos de los países industrializados están presionando a los gobiernos de los países de la región amazónica para que garanticen el acceso a minerales que son fundamentales en la ‘transición verde’ hacia una ‘economía baja en carbono’. Pero esto esconde la destrucción que está teniendo lugar en bosques y comunidades como consecuencia de las actividades de las empresas mineras (7).

La minería a pequeña escala ha sido una práctica centenaria en Sudamérica. Actualmente se estima que el número de pequeños mineros en la Amazonia es de 500 mil, y los impactos de la minería de oro, en particular, son enormes. Dado su aumento exponencial, esta actividad está cada vez más controlada en el territorio por extensas redes del crimen organizado, que también cuentan entre sus filas con figuras influyentes, como políticos. Y una vez más, son las empresas con sede en los países industrializados las que más se benefician. Las empresas suizas, por ejemplo, importaron al menos 4,9 toneladas de oro de la Amazonia brasileña en 2021. La mayor

parte de este oro fue extraído ilegalmente en territorio indígena y dejó tras de sí un rastro de violencia, asesinatos y violaciones, además de ríos muy contaminados con mercurio, un producto muy tóxico. (8).

La minería también es responsable del **extractivismo hídrico**. El agua es tan esencial para la minería que numerosas operaciones mineras extraen más agua que mineral. La ‘transición verde’ y su presión a favor de más minería tiende a profundizar este impacto particular, a pesar de que la minería provoca más deforestación, cambio climático y contaminación (9). [Un artículo de Colombia](#) en este boletín revela cómo el discurso sobre la ‘transición verde’ incentiva la extracción de cobre en la zona de transición Andes-Amazonia de Colombia y cuenta cómo la gente se resiste a ella.

Las zonas de concesión para la **extracción de petróleo y gas**, ubicadas principalmente en Perú y Ecuador, en la Amazonia occidental, tienen profundos impactos en los bosques, el agua y, en particular, en los Pueblos Indígenas. Pero esta extracción también ha provocado numerosas luchas de resistencia (10). Este boletín [incluye un artículo](#) que describe la reciente victoria histórica del pueblo ecuatoriano, el cual mediante un referéndum y por votación mayoritaria decidió dismantelar la infraestructura de extracción de petróleo en el bloque ITT dentro del parque nacional Yasuní y dejar el petróleo restante bajo el suelo.

El **‘extractivismo verde’ provoca mayor extracción de petróleo** y, por lo tanto, mayor destrucción, incluso en la Amazonia, donde hay en puerta varios nuevos proyectos extractivos. Las compañías de petróleo y gas y los gobiernos nacionales de la región afirman que para financiar la ‘transición’ a una ‘economía baja en carbono’ es necesario extraer más petróleo. La empresa estatal brasileña Petrobrás utiliza este argumento para justificar sus planes de extracción de petróleo en el llamado Margen Ecuatorial, ubicado en el océano, al norte de la región amazónica (11).

Desde la década de 1980, el enorme sistema fluvial que baña la región amazónica ha atraído el interés de los constructores de **represas hidroeléctricas** a gran escala. Empresas de este sector afirman que esta energía es ‘verde’ y ‘renovable’, con cero emisiones de carbono. Sin embargo, las investigaciones han demostrado que esto es mentira: las represas hidroeléctricas generan emisiones de CO₂ y CH₄, lo que empeora el caos climático (12). Las represas hidroeléctricas también son una causa importante de deforestación. Por ejemplo, los proyectos hidroeléctricos de Chepete y Bala, en Bolivia, con toda su infraestructura asociada –embalse, caminos, líneas de transmisión, etc.–, implicarían la deforestación de 100 mil hectáreas, además de afectar a seis grupos de Pueblos Indígenas (13).

Todas las causas directas de la deforestación requieren **infraestructura**, como oleoductos, carreteras, ferrocarriles, puertos y líneas de transmisión, lo que aumenta aún más la deforestación. Muchos de los proyectos a gran escala en marcha son parte de la iniciativa IIRSA, que es una propuesta para integrar América del Sur (y, en particular, las numerosas regiones calificadas de ‘vacías’ y ‘aisladas’ de la Amazonia) a través de la energía, el transporte y proyectos de comunicación que sirvan a los intereses del capital. Uno de esos proyectos, que ha provocado

un aumento de la deforestación en Perú, es la Carretera Transoceánica, que conecta el corazón de la Amazonia con los puertos marítimos del Perú y, desde allí, con los mercados asiáticos (14).

Extractivismo verde

Para los intereses económicos que están detrás de las causas de deforestación que acabamos de describir, el mecanismo **REDD** (Reducción de Emisiones causadas por la Deforestación y la Degradación de los bosques) nunca ha sido una alternativa seria. Estos actores pueden ganar mucho más dinero con la tala, el agronegocio, el pastoreo de ganado, la minería, la extracción de petróleo, la energía hidroeléctrica y las actividades de infraestructura, que manteniendo el bosque en pie mediante la venta de ‘créditos de carbono’. Ésta es una de las razones por las que la deforestación en la Amazonia ha continuado, y por la que esta región tiene las tasas de deforestación más altas del mundo. En 2022 se perdieron 4,1 millones de hectáreas de bosques tropicales en todo el mundo. De los seis países que más contribuyeron a esta pérdida, cuatro estaban en la región amazónica: Brasil, Bolivia, Perú y Colombia. Esto significa que estos países por sí solos representan el 60 por ciento de la destrucción de bosques tropicales en todo el mundo (15).

Las grandes empresas que contribuyen directa o indirectamente a la deforestación, como las compañías aéreas, afirman que son ‘**carbono neutrales**’ por proteger alguna zona de bosque de la Amazonia. Astutamente, estas compañías incluso invitan a sus clientes a asumir estos costos pagando una tarifa adicional además de su boleto de avión, para garantizar un viaje ‘carbono neutro’.

Los programas y proyectos de tipo REDD también justifican la creación de nuevos sitios de extracción de petróleo en la región amazónica y sus alrededores. Un ejemplo de esto es el de Guyana. En diciembre de 2022, el gobierno vendió créditos de carbono por un total de 750 millones de dólares para que la extracción de petróleo en aguas profundas (el tipo de extracción de petróleo más riesgoso) planificada por la empresa estadounidense Hess fuera ‘carbono neutral’. El proyecto supuestamente compensará las emisiones que se crearán por la combustión del petróleo extraído, al proteger toda su zona de bosque, que abarca las tierras de las comunidades que dependen del bosque,(16)

Hoy en día, en varias partes de la Amazonia es difícil encontrar comunidades indígenas a las que todavía no se les haya acercado una empresa u ONG conservacionista promoviendo el ‘**extractivismo verde**’ de REDD y solicitándoles que firmen un contrato. [Un artículo de este boletín](#) describe el modus operandi de la empresa estadounidense de carbono Wildlife Works en el territorio Ka’apor en Maranhão, y por qué los Ka’apor consideran que tal contrato es un riesgo para su autonomía.

Caos climático en la Amazonia

En la medida que REDD no hace nada para detener la deforestación y el cambio climático, en 2023 la Amazonia experimentó una sequía sin precedentes y una disminución radical del nivel del agua

de sus ríos, lo que afectó gravemente a las poblaciones de peces y los medios de vida y sustento de las poblaciones ribereñas. El calentamiento global está llevando a la Amazonia a lo que los científicos han llamado un **‘punto de inflexión’**. Superar este punto, advierten, transformaría a la Amazonia en cuestión de décadas en una región diferente, mucho más seca, comparable al bioma de la sabana (17).

Con la Amazonia en el centro de la mira internacional, las actividades destructoras de bosques, como la agricultura industrial, se han expandido y su impacto se ha intensificado en otras regiones estrechamente conectadas con la Amazonia, como las zonas de sabana aledañas. Debido a que estas regiones están mucho menos protegidas y se les presta menos atención, eso permite que sean destruidas mucho más y más rápido. Uno de los varios problemas de la ley antideforestación de la Unión Europea, que entró en vigor en 2023, es que solo se centra en la Amazonia; no se centra en la expansión a gran escala del agronegocio, las plantaciones industriales de árboles ni la minería en las zonas de sabana de Brasil. **En 2023, la deforestación en la región del cerrado brasileño aumentó un 43 por ciento** (18). Debido a su conectividad con la región amazónica, esto también impacta fuertemente en la Amazonia. Y a pesar de los discursos en los foros internacionales –como la asamblea de la ONU y las conferencias de la ONU sobre clima y biodiversidad– sobre la necesidad de salvar el bosque amazónico, en otras salas de conferencias los ministros de economía y comercio de los gobiernos del Mercosur (Brasil, Paraguay, Argentina y Uruguay) y la Unión Europea están en el proceso de finalizar un acuerdo de libre comercio. Este acuerdo tiene como objetivo aumentar las exportaciones de Brasil, el país amazónico más grande del Mercosur, aumentando así la presión sobre la región y provocando más destrucción (19).

Resistencia

Cuando los miembros de las comunidades amazónicas han tenido la oportunidad de defender sus intereses en foros nacionales o internacionales, donde se discuten políticas que influyen en el futuro de la Amazonia, su experiencia ha sido generalmente frustrante. En los foros internacionales el resultado de tales discusiones está fuertemente influenciado por los intereses de las empresas transnacionales y las grandes ONG conservacionistas, que están ansiosas por acceder y controlar la región debido a los numerosos productos comerciales–incluidos los créditos de carbono– que pueden obtener allí y de los que pueden beneficiarse.

Los pueblos de la Amazonia han tenido una experiencia igualmente frustrante con los gobiernos nacionales de la región que reclaman ‘soberanía’ sobre la Amazonia y a menudo se refieren a ella como ‘nuestra’. El enfoque ‘colonial’ de estos gobiernos sobre la región no puede ignorarse dado que apoyan activamente los intereses del capital que conllevan la invasión y la destrucción de la región. A menudo lo hacen en nombre del ‘desarrollo’. Sin embargo, la vasta experiencia con numerosos proyectos a gran escala implementados hasta ahora en la región revela que el ‘desarrollo’ no coincide con las necesidades y demandas de los Pueblos Indígenas, las comunidades amazónicas tradicionales y ribereñas o el grupo cada vez más significativo de miembros de las comunidades que ahora habitan las zonas urbanas de la región.

Debido a que se siguen implementando políticas y proyectos extractivos, y por lo tanto continúa la violencia de todo tipo que conlleva el modelo extractivista, las comunidades han comenzado a crear y fortalecer mecanismos de defensa tradicionales, como guardias indígenas para defender sus territorios. Pero hoy se enfrentan a múltiples fuerzas armadas, entre ellas la policía, los militares, los guardias de seguridad y ‘ejércitos’ de las empresas, y grupos criminales a menudo asociados con el narcotráfico. Mientras tanto, ha aumentado la criminalización, e incluso el asesinato, de líderes indígenas de la región. Los datos también muestran un aumento de diferentes formas de violencia contra las mujeres, en particular la violencia sexual. La violación es una forma de humillar a las mujeres, controlar su resistencia y crear miedo (20).

Con el foco puesto en la Amazonia, la intención de este boletín es escuchar lo que la gente en la Amazonia tiene para decir sobre los proyectos de ‘desarrollo’ en sus zonas, sobre la violencia y humillación que enfrentan por parte de las empresas y el Estado, y sobre cómo se están organizando y luchando contra estos proyectos para defender y/o reclamar sus territorios.

Y si bien la reciente Cumbre de Belém 2023 de presidentes de la región amazónica (donde también estuvieron presentes autoridades de Indonesia y la República Democrática del Congo) dejó en claro, nuevamente, que los gobiernos quieren más del mismo ‘desarrollo’, quizás lo que resulta más urgente ahora es la necesidad de promover el diálogo entre los pueblos amazónicos– que tienen una gran experiencia en resistir el ‘extractivismo verde’– y activistas de países de África Central y el Sudeste Asiático. A pesar de numerosas diferencias, todos enfrentan amenazas similares y el desafío de cómo organizarse y resistirlas.

A lo largo de los años, los pueblos de la Amazonia se han unido en busca de fuerza e inspiración en las historias de los demás y para construir alianzas, cruzando las fronteras impuestas por los países que intentan separarlos. Un ejemplo de esto es el Foro Social Panamazónico. En la declaración de la última edición de 2022, dicen:

“Reiteramos que, aunque los peligros se han acentuado, las luchas y resistencias han adquirido una fuerza sin precedentes, desde la vivencia de las espiritualidades de nuestros pueblos, que deben seguir creciendo como hijos de la Madre Amazonia. En este sentido, los pueblos de la PanAmazonia se organizan, se juntan, luchan por sus territorios y culturas, para hacer posible un futuro. Así avanzan las luchas anti-racistas, anti-patriarcales y anti-coloniales”. (21)

(1) Embrapa, [Estudo aponta que a degradação atinge mais de um terço da Floresta Amazônica](#), enero de 2023.

(2) Global Witness, [Almost 2,000 land and environmental defenders killed between 2012 and 2022 for protecting the planet](#), September 2023.

(3) Boletín del WRM, [El agronegocio es fuego: acaparamiento de tierras, deforestación e incendios en la Amazonia, el Cerrado y el Pantanal](#), diciembre de 2021

(4) Boletín del WRM, [Una lista \(incompleta\) de conceptos que matan los bosques](#), enero de 2020, y Boletín del WRM, [El FSC y la RSPO, ¿cómplices del delito? La cuestión de tierras de Jari Florestal y Agropalma en la Amazonia brasileña](#), noviembre de 2018.

(5) Boletín del WRM, [Paradojas verdes de un país amazónico](#), julio de 2021.

(6) Brasil de Fato, [Colonialismo químico: por que o Brasil está morrendo pela boca e como o agro tem culpa](#)

Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales (WRM)

[niso](#), October 2023.

(7) World Resources Institute, [Undermining Rights](#), 2020.

(8) Mongabay, [Swiss pledge to stop illegal gold imports from Brazil Indigenous reserves](#), June 2022

(9) Boletín del WRM, [Agua, extractivismo y minerales críticos en Brasil: algunas reflexiones](#), septiembre de 2022.

(10) Observatorio petrolero, [Lote 8: cifras de la contaminación petrolera](#), 2022.

(11) Brasil 247, Aos 70 anos, [Petrobras mira transição energética e Margem Equatorial](#), October 2023

(12) Instituto Humanitas Unisinos, [Como salvar a floresta amazônica? Entrevista com Philip M. Fearnside](#), August 2023.

(13) Boletín del WRM, [“Sin agua no hay vida”: los ríos en la Amazonia de Bolivia](#), septiembre de 2022.

(14) Mongabay, World Rainforests, [“Amazon Destruction”](#), November 2021

(15) Statista, [Countries with the largest area of primary tropical forest loss in 2022](#), June 2023 and Global Forest Watch, [Tropical Primary Forest Loss Worsened in 2022, Despite International Commitments to End Deforestation](#), June 2023.

(16) REDD Monitor, [“The sale by the Government of Guyana of forest-based carbon credits was fraudulent”](#), July 2023.

(17) Instituto Humanitas Unisinos, [A Amazônia se aproxima do ponto de ruptura, diz Carlos Nobre](#), January 2019-

(18) Brasil de Fato, [Alertas de desmatamento em 2023 caem pela metade na Amazônia, mas sobem no Cerrado](#), Janeiro 2024.

(19) Greenpeace, [EU-Mercosur: A nightmare for nature](#), March 2023

(20) Mongabay, [Triple riesgo: ser mujer, indígena y defensora ambiental en América Latina](#), November 2021.

(21) [Declaración final Panamazónica de Belém en el X Foro Social Panamazónico-FOSPA](#).

La lucha por la tierra en la Amazonía brasileña contra las empresas mineras y de palma aceitera

En la región del Vale do Acará, en el estado de Pará, los pueblos indígenas Tembé y Turiwara y las comunidades quilombolas y campesinas luchan por recuperar parte de los territorios de vida que han ocupado tradicionalmente. No se trata de una lucha solo por recuperar el territorio, sino para revertir una historia de opresión e injusticia. Hoy denuncian la violencia estructural que sufren y la omisión del Estado.

Pará es el segundo mayor estado de la Amazonía brasileña. En su territorio desemboca el río Amazonas y viven los pueblos indígenas **Tembé** y **Turiwara**, que tradicionalmente han ocupado la región del **Vale do Acará**, en el nordeste del estado, donde se ubican los municipios de Tailândia, Acará y Tomé-Açu. Durante el proceso de colonización, su territorio, abundante en bosques, ríos y tierras fértiles, poco a poco fue saqueado para la extracción de madera y la explotación de monocultivos de caña de azúcar y tabaco para enriquecer la metrópoli portuguesa. Los Tembé y los Turiwara fueron objeto de todo tipo de violencia, no solo colonial, sino también patriarcal y racista, como el proceso llamado de *aldeamento*, cuyo objetivo era expulsarlos de sus territorios para apoderarse de esas tierras (1). La violencia y la represión contra sus actos de resistencia, así como las epidemias, dieron lugar a un verdadero genocidio, reduciendo drásticamente su población.

Con la esclavitud, también llegaron a la región personas del continente africano sometidas al trabajo esclavo. "Construimos los ingenios de azúcar con nuestras propias manos", dice un líder quilombola, descendiente de esas personas esclavizadas. "Cuando se abolió la esclavitud, nos quedamos abandonados aquí, sin reparación ni apoyo. El único 'documento' que tenemos de esa época es un ingenio azucarero que nuestro pueblo construyó por completo", añade (por razones de seguridad, se preservan los nombres de las personas que dieron sus testimonios para este artículo).

En las márgenes del río Acará, incluso tras el decreto oficial del fin de la esclavitud en 1888, hasta mediados de la década de 1970, las familias portuguesas con poder, prestigio y riqueza acumularon grandes extensiones de tierra bajo su estricto dominio. Tenían casas comerciales situadas en puntos estratégicos a lo largo del río y mantenían como *agregados* a indígenas (Turiwara y Tembé), quilombolas y ribereños, por medio de relaciones de dominación basadas en el control represivo de la mano de obra, el sistema de *aviamento* (2) y la usurpación territorial. (3) Gran parte de las tierras que usurparon esas familias de origen portugués se las vendió posteriormente a terratenientes y grandes empresas del agronegocio del aceite de palma, el coco y la madera.

A partir de 1952, cuando se puso en marcha el proyecto JAMIC Imigração e Colonização Ltda en el entonces municipio de Acará, actual Tomé-Açu, las tierras tradicionalmente ocupadas por los

indígenas Turiwara y Tembé en las cercanías del río Acará-Mirim les fueron usurpadas durante el proyecto oficial de colonización japonesa, financiado con fondos públicos y privados.

La presión sobre los territorios tradicionales se agravó aún más tras la ejecución de proyectos de explotación maderera, agrícola y ganadera financiados por medio de incentivos fiscales concedidos por la Superintendencia para el Desarrollo de la Amazonia (SUDAM). Esos incentivos se instituyeron en el marco de la Operación Amazonía, iniciada en 1966, que pretendía fomentar la creación de empresas rurales y “polos de desarrollo industrial” en las diferentes regiones de la Amazonía. En ese contexto, el municipio de Tomé-Açu se convirtió en uno de los principales “polos madereros” del estado de Pará.

Un líder Turiwara nos habla de este proceso histórico de invasión de sus tierras: “Somos los pioneros, los herederos del territorio que nos dejaron nuestros antepasados. Nos expulsaron los ganaderos de entonces, que llegaron y nos dijeron que nos fuéramos (...) Nos dijeron ‘miren, tienen dos o tres días para desocupar, si no se van, vamos a traer más gente para que se vayan’, nos dio miedo y [así] mucha, mucha gente fue expulsada”.

La invasión de territorios indígenas, quilombolas y campesinos por empresas mineras y de palma aceitera

Si en tiempos pasados los colonizadores invadieron sus territorios con plantaciones de caña de azúcar y tabaco, hoy son los monocultivos de palma aceitera y los mineroductos los que se han apoderado de los territorios Tembé, Turiwara, quilombola y campesinos de la región del Vale do Acará.

Dos compañías dominan la producción industrial de aceite de palma: Brasil Bio Fuels (BBF), que compró la empresa Biovale en 2019 y controla unas 135.000 hectáreas de tierra en la región; y Agropalma, que está presente en la región desde 1982 y controla 107.000 hectáreas de tierra. (4) Entre sus compradores internacionales se incluyen Cargill, Hershey’s, General Mills, Kellogg’s, Mondelez, Nestlé, PepsiCo, Stratas Foods y Unilever (5). En 2022, los ingresos de Agropalma ascendieron a US\$ 486 millones y los de BBF a US\$ 305 millones (6).

Se tratan de empresas que se presentan como ‘modernas’, ‘verdes’, que producen ‘energías renovables’ como el biodiésel, pero gran parte de sus tierras pertenecen al Estado y sus títulos han sido falsificados (7). Así describe un líder quilombola la llegada de una de esas empresas: “Cuando BBF llegó, todavía se llamaba Biopalma. La empresa llegó sin hacer ruido, con la ayuda de *grileiros* [acaparadores de tierras] que tomaron las tierras que pertenecían a quilombolas y campesinos. La empresa no actuaba directamente. Destruyeron el bosque, yo me acuerdo, por ejemplo, de que talaron unas 600 hectáreas de castaños. Y luego esos acaparadores entregaron las tierras a Biopalma, defraudando la cadena de títulos de propiedad”.

El aceite de palma actualmente es el aceite vegetal más barato del mundo, pues se basa en una lógica colonial de producción, de llevárselo todo sin pagar por ello. Las compañías, por ejemplo, no se hacen cargo de los impactos de la deforestación que provocan. No pagan por el agua que

utilizan en las plantaciones –unos 34.000 litros diarios de agua por hectárea (8)– ni por el consumo de agua en sus fábricas. Tampoco pagan por la contaminación que provocan los fertilizantes químicos y, sobre todo, los pesticidas como el glifosato, un herbicida potencialmente cancerígeno ya detectado en las aguas superficiales y subterráneas de territorios indígenas (9). Además, las empresas vierten en las plantaciones un subproducto de la producción de aceite de palma como 'abono orgánico', que está destruyendo la vida en los igarapés, como lo denuncian indígenas y quilombolas.

Como resultado, está la destrucción. Según un líder quilombola: “Las empresas contaminan el aire, el agua y también contaminan nuestras vidas. Porque después que la palma aceitera empieza a crecer, vierten agrotóxicos que contaminan el agua, y también el [sub]producto de la producción del aceite de palma. Ahora no solo perdimos nuestra tierra, sino también nuestra agua, nuestros manantiales. La población tiene problemas de salud, un 15 por ciento de nuestra gente está enferma a causa del aceite de palma. Cuando uno va a pescar a las 6 de la mañana, a las 7 el pescado ya está podrido. El color del agua ha cambiado, hay muchas polillas, un claro indicio de desequilibrio. La producción de yuca ya no es la misma, los cultivos están enfermos”.

Las pequeñas áreas donde viven las comunidades ahora están cercadas por plantaciones de palma aceitera, lo que hace inviable su modo de vida y las hacen sentir como si estuvieran en una 'cárcel'. La comunidad quilombola de São Gonçalves, por ejemplo, está rodeada por las plantaciones de Agropalma. Se construyó un portón de acceso para controlar quién entra y quién sale, y se cavaron profundas zanjas para que los quilombolas y los indígenas no puedan acceder a sus antiguos cementerios ni a las zonas donde tradicionalmente cazaban y pescaban y que ahora que están dentro del territorio controlado por Agropalma. Según un líder Turiwara: "No les gusta que bajemos [al río], de ningún modo, ni para pescar, ya no podemos hacerlo, así que esto nos está afectando mucho, muchísimo. Queremos que se tomen medidas, pues vivimos aquí y nos sentimos muy humillados por esta empresa, nuestros animales caen en esas zanjas y mueren”.

También hay mineroductos que cruzan la región, generando conflictos. Uno de ellos, que transporta bauxita del municipio de Paragominas a Barcarena, pertenece a Hydro, empresa controlada por la compañía noruega Norsk Hydro, cuyo principal propietario es el Estado noruego (10). En 2023, la Defensoría Pública de Pará reclamó que la Hydro suspendiera las obras de su mineroducto debido a irregularidades en el proceso de concesión. Las comunidades quilombolas han denunciado ante la Defensoría que se sienten 'refugiados' en su propio territorio, debido a la ilegalidad de las obras, con trabajadores y camiones transitando por sus tierras. (11) Otro mineroducto que atraviesa la región es propiedad de la multinacional francesa Imerys, que transporta caolín del municipio de Ipixuna a Barcarena. (12) A esos se suma un nuevo proyecto al que las comunidades ahora se enfrentan: el Ferrocarril Paraense, que va desde el sur de Pará hasta Barcarena (donde se ubica el mayor puerto del estado), con el que el gobierno estadual pretende impulsar la plantación y exportación del monocultivo de soja.

Intentar cambiar la historia: recuperar los territorios

Hace muchos años que los quilombolas y los Pueblos Indígenas denuncian la invasión de sus territorios y todos los demás impactos provocados por las empresas. Estas empresas, a su vez, siguen negando los impactos de sus actividades y buscan hacer acuerdos con las comunidades con promesas como la creación de proyectos sociales. Según los indígenas y quilombolas, tales promesas no se cumplen totalmente y, lo más importante, no resuelven el problema central: la demarcación de sus territorios.

Si bien la empresa Ymeris hizo una “donación” de 500 hectáreas de tierra a los Tembé a finales de la década de 1990 en un intento de resolver los conflictos con la comunidad, la mayor parte del territorio sigue en manos de grandes empresas, con el respaldo del Estado brasileño. Basta comparar las más de 240.000 hectáreas en manos de BBF y Agropalma con el tamaño del territorio indígena oficialmente demarcado por el Estado brasileño en la misma región: 147 hectáreas en el Territorio Indígena Turê-Mariquita que pertenece al pueblo Tembé, el menor territorio indígena oficialmente demarcado en Brasil.

Cansados de esperar, en 2021 los Tembé y las comunidades quilombolas iniciaron una lucha por recuperar sus tierras, ahora en manos de BBF y Agropalma, con el fin de garantizar la posesión de al menos parte del territorio del cual fueron expulsados en el pasado. Durante este proceso, los Turiwara revelaron públicamente su identidad y hoy reclaman las tierras a lo largo del río Acará donde el biólogo alemán Meerwarth encontró a sus ancestros en 1899 (13), sumándose a sus parientes Tembé en esta lucha, como explica un líder Turiwara: “Soy Turiwara, porque nuestros antepasados, por parte de madre, son Turiwara. Hay un pueblo Turiwara y también un pueblo Tembé, somos una mezcla pero estamos unidos.”

Uno de los principales referentes en la resistencia actual es el Movimiento IRQ (Indígena, Ribereño y Quilombola), que intenta unificarse y sumar más apoyos a su lucha, como explica una de sus lideresas: “Estamos luchando para garantizar todos nuestros derechos, pero hoy nuestra mayor lucha y nuestro gran reto es garantizar el derecho a nuestro territorio. Por eso creamos el Movimiento, para que se haga eco de nuestras voces, para que lleguen a los oídos de las autoridades competentes para resolver esa problemática del territorio que hoy enfrentamos los pueblos indígenas, quilombolas y ribereños, al ver nuestro territorio invadido por el monocultivo de palma aceitera, como es el caso de Brasil Biofuels, y por empresas mineras, como la Hydro”.

La lideresa destaca la participación de las mujeres: “La participación de las mujeres indígenas, ribereñas y quilombolas es una forma de demostrar que luchamos por nuestras familias, por nuestro pueblo como un todo. Para demostrar que luchamos para garantizar la supervivencia de nuestras futuras generaciones y para garantizarles sus derechos. La participación de las mujeres indígenas en este Movimiento es para sumar esfuerzos junto a nuestros guerreros y garantizar los derechos de nuestras futuras generaciones”.

Los Tembé, Turiwara y quilombolas reclaman ante los órganos oficiales la demarcación inmediata de sus territorios. En el caso de los indígenas, ante la FUNAI, el instituto federal de asuntos indígenas. Y en el caso de las comunidades quilombolas, ante el INCRA, organismo federal de

regularización de tierras, y el ITERPA, organismo de tierras del estado de Pará. Además, las comunidades campesinas forman parte de esta misma lucha para garantizar la posesión de sus tierras ante la amenaza de la expansión de la palma aceitera.

La lucha campesina de la comunidad Virgílio Serrão Sacramento

Las comunidades campesinas que viven en la región están recuperando espacios de vida de los que fueron expulsadas en el pasado por madereros y terratenientes en procesos de acaparamiento de tierras. Es el caso de las familias de la comunidad de Virgílio Serrão Sacramento, en el municipio de Mojú. A finales de 2015, las familias se reunieron y volvieron a ocupar el territorio en el cual varias de ellas fueron víctimas de los grileiros. Lo que las impulsó a hacerlo fue la posibilidad inminente de que BBF se apropiara de esas tierras para ampliar sus plantaciones en la región. Además, estaban convencidas de que se trataba de tierras públicas. Por lo tanto, deberían beneficiar a las familias campesinas y no a empresas privadas como BBF.

Tras la recuperación del territorio, las familias solicitaron al ITERPA la regularización de las 700 hectáreas del asentamiento. Sin embargo, el trámite quedó suspendido después de que, en 2020, la BBF se beneficiara de una medida cautelar que decretaba la devolución de las tierras para su uso. Esto no llegó a pasar porque las familias lograron demostrar que BBF había utilizado títulos de propiedad falsos. A mediados de 2023, la empresa obtuvo una nueva medida cautelar que exigía a las familias desalojar la zona. Actualmente, el caso sigue en análisis en la Comisión de Conflictos por la Tierra del estado de Pará. Las familias piden que el ITERPA haga una inspección en la zona para demostrar de forma definitiva que las tierras donde se encuentran son públicas y, por lo tanto, deben regularizarse a favor de las familias.

Así lo expresaba un miembro de la comunidad: “Aquí lo hemos construido todo: nuestras casas, nuestro ganado, nuestros cultivos, nuestras huertas, para nuestra subsistencia. Hoy, las familias viven de todo lo que han construido colectivamente y trabajando con afecto, cuidando la tierra, respetando el ambiente, todo lo que vive en la naturaleza. Hoy realmente necesitan estas tierras para poder seguir con su vida, su vida cotidiana, ayudar a sus familias, ayudar a otras comunidades que necesitan nuestro apoyo. Hoy BBF intenta quitarnos las tierras por medio de una medida cautelar, pero hay muchos indicios del acaparamiento de tierras que ha llevado a cabo en el estado de Pará, y por esa razón intentan expulsar a las familias de sus tierras, y es muy lamentable lo que está ocurriendo. La comunidad está en tierras públicas, que pertenecen al Estado, así que, si son tierras públicas, el gobierno estadual debería apoyar a las familias. Expresamos nuestro repudio ante esta situación; que vengan las autoridades y nos ayuden a quedarnos, a vivir aquí como comunidad.”

La omisión del Estado ante la violencia estructural y extrema

Desde que las comunidades empezaron a recuperar sus tierras en 2021, sufren ataques violentos por parte de diversos grupos fuertemente armados, como la propia policía del estado de Pará, guardias de seguridad privados y paramilitares que trabajan para las empresas, además de la delincuencia organizada. Hubo un aumento alarmante de la persecución, las amenazas de

muerte, las humillaciones e incluso el racismo por parte de la población local contra las comunidades Tembé, Turiwara y quilombolas, a las que se las acusa de obstaculizar el desarrollo. Las sucesivas quejas y denuncias presentadas por las comunidades ante los organismos competentes han quedado sin respuesta. Los líderes lo repiten una y otra vez: “Agropalma y BBF no exportan aceite de palma, exportan nuestra sangre”.

BBF, en particular, está llevando a cabo una campaña de criminalización contra las comunidades a través del registro de cientos de denuncias policiales contra sus miembros, acusándoles de actos ilícitos como amenaza, robo, extorsión y daños (14), y sugiriendo que el verdadero objetivo de las comunidades sería tener acceso a las plantaciones de palma aceitera. Al respecto, nos dice un líder Turiwara: “Nos humillan diciendo que no nos entregarán su aceite de palma, que el aceite les pertenece. Así que, te voy a decir una cosa, no nos interesa el aceite de palma, no nos interesa nada de lo que tienen, nos interesa nuestro territorio, es nuestro territorio lo que queremos, queremos volver a vivir en él porque nos pertenece, porque es nuestro hogar”.

En medio del recrudecimiento de los conflictos por la tierra, la certificadora internacional RSPO (Mesa Redonda sobre la Palma Aceitera Sostenible) se ha mostrado connivente con las empresas de palma aceitera. Tras suspender el sello 'verde' de Agropalma durante un breve periodo debido a estos conflictos, la RSPO no tardó en devolvérselo en junio de 2023. (15)

Uno de los muchos episodios de violencia se produjo en vísperas de la Cumbre de Belém, celebrada en agosto de 2023, donde se reunieron, a menos de 200 kilómetros de la región, los presidentes de los países amazónicos. Entre el 4 y el 7 de agosto, se produjeron violentos atentados contra la vida de cuatro indígenas Tembé debido a su lucha por recuperar los territorios que están en manos de BBF en Tomé-Açu (16).

En esa ocasión, el Consejo Nacional de Derechos Humanos (CNDH) visitó la región y solicitó, entre otras medidas, la creación inmediata de un gabinete de crisis por parte de la Secretaría General de la Presidencia de la República; cambios en las fuerzas policiales encargadas de la seguridad en Tomé-Açu y Acará; la creación de grupos de trabajo por parte de la FUNAI para demarcar los territorios indígenas, y que el INCRA y el ITERPA hagan lo mismo para regularizar los territorios quilombolas (17). La Asociación Brasileña de Antropología (ABA) remitió una carta a las autoridades sobre el mismo episodio, en la que reclama la reanudación inmediata del proceso de regularización de los territorios indígenas y quilombolas, así como una investigación acerca de los mecanismos de criminalización contra las y los líderes de las comunidades y la suspensión de los incentivos a las empresas involucradas en los actos de violencia, entre otras medidas. (18)

Casi seis meses después, vemos que prácticamente ninguna de las recomendaciones de la CNDH y de la ABA se puso en práctica. Ni siquiera el despliegue de la Fuerza de Seguridad Nacional en la región logró evitar que la violencia se intensificara en los últimos meses.

El 10 de noviembre de 2023, el indígena Turiwara Agnaldo da Silva fue asesinado dentro de las tierras que Agropalma reclama como suyas, por guardias de seguridad de la empresa, como denuncia el grupo indígena del que Agnaldo formaba parte. (19) Desde diciembre de 2023, el

Movimiento IRQ denuncia ante las autoridades que las comunidades sufren invasiones y ataques violentos y que sus líderes sufren amenazas de muerte. El 14 de diciembre, dispararon contra cuatro quilombolas, pero afortunadamente nadie murió. La lideresa Miriam Tembê, referente en la lucha por la tierra, fue detenida el 3 de enero de 2024, con fuertes indicios de que su detención tenía por objeto criminalizar y debilitar al Movimiento IRQ (20). Uno de esos indicios es la decisión expresamente inconstitucional y disparatada del juez José Reinaldo Pereira Sales, que determina que la libertad de Miriam sea condicionada a su destitución como líder de su comunidad. (21) El Movimiento teme más violencia y más arrestos de líderes.

La omisión del Estado ante esta situación es inaceptable. Quienes salen ganando son las empresas mencionadas en este artículo. Para ellas, las comunidades representan un 'obstáculo' a sus actividades rentables y a sus planes de expansión. Está claro que una situación de permanente violencia extrema y criminalización afecta la capacidad de las comunidades indígenas y quilombolas de organizarse, unirse y seguir luchando por la demarcación de sus territorios.

Para detener el derramamiento de sangre y evitar nuevos actos de violencia, es sumamente urgente que las autoridades competentes pongan en práctica las recomendaciones presentadas en los documentos de la CNDH y de la ABA. Asimismo, destacamos la recomendación de que los órganos federales y estatales competentes lleven a cabo la demarcación de los territorios que legítimamente pertenecen a los pueblos indígenas Tembê y Turiwara y a las comunidades quilombolas y campesinas.

Por último, expresamos nuestra solidaridad con los Tembê, Turiwara y quilombolas que son víctimas de prácticas violentas.

(Por razones de seguridad, se preservan los nombres de las personas que dieron sus testimonios para este artículo).

(1) CEDI, 1985. Povos Indígenas no Brasil, Sudeste do Pará (Tocantins), Vol. 8, coord: Carlos Alberto Ricardo; and Carneiro Tuly, João Paulo, 2017. "Tensões territoriais na Amazônia Paraense, o povo indígena Tembê-Turê-Mariquita no município de Tomê-Açu". Dissertation.

(2) Una forma de esclavitud moderna en la que el trabajador se ve sometido a una relación de dependencia y de deuda interminable con el propietario.

(3) Quilombolas e indígenas nos processos de territorialização no Rio Alto Acaré, 2022. Rosa Acevedo Marin, Elielson Pereira da Silva and Maria da Paz Saavedra, pp. 102-126. In: Quilombolas: direitos e conflitos em tempos de pandemia, 2023 (eds.: Ana Paula Comin de Carvalho, Osvaldo Martins de Oliveira, Raquel Mombelli)

(4) <https://www.grupobbf.com.br> and <https://www.agropalma.com.br/>

(5) Global Witness, [A Sombra do Dendê](#), 2022.

(6) The Guardian, [The multinational companies that industrialised the Amazon rainforest](#), June 2023

(7) Reporter Brasil, [Cercados pelo dendê, povos tradicionais vivem terror em disputa fundiária com produtora de biodiesel](#), agosto 2022

Avispa Media, [Palma e Conservação: aliadas na expulsão de comunidades na Amazônia brasileira](#), maio 2023

Agência Publica, [Com inércia do governo, empresas do dendê avançam sobre terras públicas da Amazônia](#),

Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales (WRM)

agosto 2022

Metrópolis, [Ouro líquido: Produção de dendê explora populações negras e indígenas no Brasil](#), Novembro 2022

Mongabay Brasil, [Exportadora de óleo de palma acusada de fraude, grilagem de terras em cemitérios quilombolas](#), Dezembro 2022

(8) Grain, [Toxic river: the fight to reclaim water from oil palm plantations in Indonesia](#), December 2020

(9) Mongabay Brasil, [Desmatamento e água contaminada: o lado obscuro do óleo de palma 'sustentável' da Amazônia](#), 2021

(10) Boletín WRM, [Brasil: La represa de residuos de la minera de alúmina Hydro Alunorte. ¿Un desastre anunciado?](#), Noviembre 2019

(11) Globo.com, [Ação quer suspender obras de mineroduto dentro de área quilombola no Pará](#), Outubro 2023

(12) Carneiro Thury, João Paulo, 2017. Tensões territoriais na Amazônia Paraense: o povo indígena Tembéturê-Mariquita no município de Tomê Açu. Master's dissertation.

(13) Globus, *Illustrierte Zeitschrift für Land und Völkerkunde*, 1904. Eine Zoologische Forschungsreise nach dem Rio Acará im Staate Pará (Brasilien), H. Meerwarth.

(14) MPF/PA. Recomendación 18/2023 en la Investigación Civil 1.23.000.000550/2021-10

(15) Nota de Agropalma, 2023. Aclaraciones sobre el artículo publicado en la página web ver-o-fato.

(16) MPF/PA. Recomendación 18/2023 em la Investigación Civil 1.23.000.000550/2021-10

(17) CNDH, [Recomendación No. 16](#), de 08 de Agosto de 2023.

(18) ABA, Comunicado No. 041/2023/ABA de 09 de agosto de 2023.

(18) ABA, Letter No. 041/2023/ABA of August 9, 2023.

(19) BT Mais, [Indígena morre baleado por seguranças de empresa em Tailândia \(Pará, Brasil\), denuncia etnia Turiwara](#), Novembro 2023

(20) [Carta Em Solidariedade À Cacica Miriam Tembê](#)

(21) Acción Penal 0802666-85.2023.8.14.0060, decisión de 26/01/2024.

Incendios y agronegocios, motores de la deforestación en la Amazonía boliviana

La expansión de la frontera agrícola para el cultivo de soja o palma aceitera así como la minería y la posible construcción de mega represas avanzan sobre los espacios vitales de comunidades indígenas y campesinas. A fines de 2018, los pueblos se organizaron en una Coordinadora para defender sus territorios y el derecho a una vida digna.

Un 11 por ciento de la Amazonía se concentra en territorio boliviano. En una definición amplia, la región amazónica en este país comprende los departamentos de Beni y Pando, así como las regiones al norte de Santa Cruz, La Paz y Cochabamba.

La deforestación en el territorio amazónico boliviano viene aumentando significativamente en los últimos años, principalmente con la expansión de la agroindustria, las obras de infraestructura, la minería, los incendios forestales a gran escala y el desarrollo de políticas de gobierno que agilizan la agenda extractivista.

El 2 de diciembre de 2018, por voluntad de 12 pueblos y organizaciones en resistencia al extractivismo, se creó la Coordinadora Nacional de Defensa de los Territorios Indígenas Originarios Campesinos y Áreas Protegidas (CONTIOCAP). Su objetivo principal es la articulación de las comunidades y pueblos indígenas y campesinos que defienden sus derechos con independencia, en un contexto cada vez más adverso por las políticas extractivistas promovidas en el país.

La CONTIOCAP, en sus pocos años de vida, se ha posicionado en la opinión pública como un referente de dignidad y de aporte al debate público. Sus acciones incluyen análisis de la coyuntura, denuncias de las crecientes violaciones a los derechos humanos y de los pueblos indígenas, y propuestas alternativas al extractivismo.

A fines de 2023, el WRM conversó con Ruth Alipaz, lideresa indígena originaria de la Nación Uchupiamona, en la Amazonía boliviana, integrante CONTIOCAP, para reflexionar sobre la situación en este territorio y la fuerte resistencia que los Pueblos Indígenas vienen librando.

El negocio de quemar

Se estima que en 2023 los incendios forestales se llevaron 3 millones de hectáreas de bosques en Bolivia. Los incendios se han visto agravados por la sequía que atraviesa el país, con una reducción de lluvias del 17 por ciento en 2023 en comparación con años anteriores. Pero esta situación no es por azar. Por detrás de estos incendios están principalmente las empresas del agronegocio. Es un ataque directo a los territorios y a las áreas protegidas, que se superponen en gran medida a los territorios indígenas.

Para ampliar la frontera agrícola, los empresarios agroindustriales realizan el chaqueo (la quema de ciertas áreas para luego realizar agricultura) indiscriminadamente y rebasan la frontera agrícola. Esto es posible ya que el gobierno no tiene ningún tipo de mecanismo serio de control a estas grandes corporaciones agropecuarias. A su vez, estas empresas muchas veces se benefician de las ganancias que producen en tierras comunitarias ya que los pobladores se ven obligados a alquilar las tierras porque no tienen los recursos suficientes para explotarla para el beneficio de ellos y la comunidad. Estos empresarios que pasan la frontera agrícola ilegalmente son sancionados con la ridícula multa de 0,20 centavos de dólar por hectárea quemada, lo que significa, que es una invitación a quemar más de lo permitido y sacar enormes ganancias.(1)

Ruth Alipaz nos explica como las empresas le encontraron el negocio a quemar para que el bosque pierda valor. “Prenderle fuego al bosque es una forma de deforestación cruel de bosque primario a bajo costo. Permite el cambio de uso de suelos para luego poder establecer plantaciones de monocultivos por ejemplo”, afirma.

Ruth nos cuenta que “cada año las y los bolivianos respiramos el humo y las cenizas de nuestro futuro, porque nos están despojando de nuestros medios de vida y de nuestra dignidad. Y no solo a los Pueblos Indígenas. Para nosotros la dignidad nos la da nuestro territorio, donde somos conocidos y reconocidos porque somos alguien. Se tiene dignidad en la medida que se aporta con los sueños de realizar un proyecto para la autonomía haciendo uso de su cultura y saberes ancestrales”.

Sumado a los incendios, la deforestación en la Amazonía boliviana ha venido aumentando a pasos agigantados.

Deforestación y agronegocios

En 2022, la tasa de deforestación de la Amazonía boliviana fue la segunda más alta de la región Amazónica, por detrás solo de Brasil, y la tercera a nivel global en cuanto a hectáreas deforestadas. Se estima que en ese año hubo 270 mil hectáreas desmontadas. De acuerdo a la Fundación Tierra, una organización boliviana, durante el quinquenio comprendido entre 2016-2021, la deforestación tuvo un aumento de 73 por ciento con respecto al período 2010-2015. Aún no hay cifras oficiales para 2023, pero los especialistas coinciden en que la tendencia es que la deforestación siga creciendo. (2)

Este aumento gigantesco en las tasas de deforestación es en gran medida el resultado de la expansión del agronegocio industrial, destinado a la producción de soja y ganadería para la exportación. De acuerdo a la Fundación Tierra, “la expansión del modelo sojero es el motor del cambio, cuya fuerza impulsora es la consolidación de los derechos de propiedad de la tierra para las grandes y medianas propiedades empresariales. Los bosques se eliminaron para habilitar más tierras para cultivos de soja, de modo que el sector sojero crece a un ritmo mayor que otros sectores comerciales (maíz, sorgo, trigo, caña de azúcar, arroz). La titulación de extensas áreas de bosques como tierras de propiedad privada y la masiva entrega de autorizaciones de desmontes sentaron las bases para habilitar ágilmente extensos campos de cultivos. Al avance de la

agricultura industrial, le sigue la ganadería para la exportación”. Sólo de soja, Bolivia cuenta con cerca de un millón y medio de hectáreas plantadas y se ubica entre los principales exportadores.

A modo de ejemplo, el departamento de Beni, ubicado en el corazón de la Amazonía y donde habitan 18 de los 36 Pueblos Indígenas en Bolivia, no está exento de estas presiones, por el contrario. Los gobiernos que han estado de turno desde 2016 impulsaron la actualización del Plan de Uso de Suelo (PLUS) y, en 2019, se llevó a cabo una revisión y actualización del PLUS Beni. Según un estudio académico, este plan se realizó “bajo la premisa de ampliar la frontera agropecuaria y sacar al departamento de la pobreza”. (3) Sin embargo, numerosas organizaciones indígenas criticaron duramente el proceso por no tenerlos en cuenta ni haberlos consultado. Denuncian que solo se consideraron las opiniones de los sectores empresariales, en particular de los ganaderos, que tienen intereses económicos en ampliar la frontera agrícola-ganadera. (4)

El nuevo Plan PLUS Beni es a fin de cuentas una herramienta que habilita la destrucción de la Amazonía, sin considerar las formas de vida de los numerosos Pueblos Indígenas que tradicionalmente han habitado y por ende conservado estos territorios.

Palma aceitera para “biocombustibles”

Otra de las causas subyacentes de los incendios, según denuncias de activistas y organizaciones locales, está relacionada a la promoción de cultivos para la producción de los mal llamados ‘biocombustibles’. Recientemente, bajo pretextos de generar empleo y reducir la dependencia sobre combustibles fósiles, el gobierno boliviano lanzó una serie de medidas que favorecen la plantación y expansión de tres nuevos cultivos: palma aceitera, palma de jathropa y macororó. Se trata de la incorporación de tres nuevos cultivos, hasta ahora no expandidos en Bolivia, que se sumarán a las áreas ya existentes de soja, caña de azúcar, etc.

Las plantaciones de palma aceitera son un cultivo hasta hace poco desconocido en Bolivia. A través del llamado ‘Programa de Fomento a las Especies Oleíferas’, el gobierno ya ha establecido más de 18 viveros, con capacidad de producir 48 mil plantines. El programa está enfocado en la región amazónica ya que las palmas requieren de mucha humedad para crecer. El objetivo del programa es llegar en cinco años a plantar un área de 60 mil hectáreas. (5)

De acuerdo a declaraciones en medios de prensa nacionales de Javier Mamani Quispe, coordinador, “el programa no va a resultar en deforestación, sino que va a rehabilitar suelos degradados”. Sin embargo, la experiencia con este cultivo en países de Africa, Asia y América Latina no sólo muestra que las plantaciones industriales de palma son una causa de deforestación y contaminación de suelos y fuentes de agua, sino que además resultan en numerosos impactos sobre los pueblos que viven dentro y alrededor de los territorios que estos monocultivos ocupan.

¿Serán las miles de hectáreas de bosques primarios incendiados declaradas como tierras degradadas y por tanto plausibles de ser ocupadas con monocultivos de palma?

La expansión de la palma aceitera se vincula a la violación de derechos de los Pueblos Indígenas y comunidades campesinas, así como a la afectación de sus medios de vida y culturas. Se han documentado numerosos conflictos de derechos sobre la tierra. Las mujeres, incluyendo a las trabajadoras, y las niñas son quienes sufren las más profundas injusticias y desigualdades frente a la expansión de esta industria y se enfrentan a continuas formas de opresión. (6)

Mega-Represas e infraestructura

De la mano con el extractivismo, también avanza la construcción de obras de infraestructura necesarias para procesar y trasladar las mercancías producidas, como mega-represas para producir energía.

Por ejemplo, en la cuenca del Río Beni, que atraviesa el Parque Nacional Madidi -una de las zonas más biodiversas del planeta- y la Reserva Pilon Lajas, el gobierno intenta desde hace años impulsar las mega-represas de Chepete y Bala. Se estima que el 75 por ciento de la producción de energía que tendrá la represa del Bala será para exportar a Brasil. Ambos embalses inundarían miles de kilómetros cuadrados y se estima generarían una deforestación superior a las 100 mil hectáreas. Sobre las tierras que quedarían sumergidas viven seis Pueblos Indígenas: los Mosetenes, Chimanos, Esse-ejjas, Lecos, Tacanas y Uchupiamonas, el Pueblo al que Ruth pertenece. (7)

Hasta el momento la construcción de las represas está paralizada, pero el hostigamiento y la presión continúan. Asimismo, para construir represas se necesita de la apertura de carreteras, lo que abriría el territorio para las empresas madereras y mineras entre otras actividades destructivas. Ruth explica: “Es un hecho que toda esta avalancha de actividades extractivas, de normativa que las facilita y alienta, además de las grandes infraestructuras de energía y transporte, los complejos industriales de dudosa viabilidad técnica y económica (como el ingenio azucarero San Buenaventura) y los avances de colonos y especuladores de tierras, todo en conjunto, forma parte de una verdadera cruzada de colonización y expoliación hacia el norte amazónico, donde los grandes perdedores son las comunidades y Pueblos Indígenas”.

La visión indígena sobre la deforestación y sus luchas de resistencia

No obstante, durante la conversación Ruth remarcó cómo los Pueblos Indígenas en Bolivia han jugado históricamente un papel central en la defensa de los territorios y todavía se mantienen firmes en su lucha.

Como resultado de las luchas de los Pueblos Indígenas en Bolivia, tanto de la Amazonía, como del Chaco, de los Valles y el Altiplano, se dio la Nueva Constitución Política del Estado (CPE) de 2009. Esta reconoce a los Pueblos Indígenas, a los Territorios Indígenas, a la Justicia Indígena Originaria Campesina, y principalmente a la Autonomía y Autodeterminación de los Pueblos Indígenas en sus territorios por derecho pre existente, con base en el Convenio 169 y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, Leyes 3.760 y 3.897 en Bolivia.

Sin embargo, Ruth explicó cómo, sobre la Carta Magna y otras leyes como la de la Madre Tierra, se han ido emitiendo sistemáticamente otras leyes y decretos que contravienen lo establecido en la Constitución. Esas normas de menor rango son las que, en el análisis de Ruth, se imponen como política de gobierno, “legalizando lo ilegal e inconstitucional para una política económica extractivista, capitalista, donde los grandes capitales y empresarios nacionales y transnacionales son los que reciben normas a pedido y medida de sus intereses”.

Así, por ejemplo, durante el período 2013-2019, se aprobaron un conjunto de normas conocidas como las ‘normas incendiarias’, que directa o indirectamente amplían la cantidad de hectáreas permitidas para deforestar y quemar, flexibilizando los mecanismos legales que estaban vigentes en el país. De la misma manera, la Ley de Minería y Metalurgia 535 del mismo periodo permite la minería dentro de Áreas Protegidas sin cumplir con normas como el Estudio de Impacto Ambiental (EIA), y dentro de Territorios Indígenas, eximiéndoles de realizar la Consulta Libre Previa e Informada (CLPI) a los Pueblos Indígenas, con el argumento de que los mineros tienen derechos preconstituidos a dicha ley.

Las políticas gubernamentales de los últimos años, afirma Ruth, están a favor de los grandes poderes económicos. “Estas políticas violan la integridad de la Madre Tierra, quitándole su virtud y capacidad de dar, generar y regenerar vida. Van cortándole sus venas, que son los ríos, para minería de oro con uso de mercurio y mega proyectos hidroeléctricos. Van desnudando su piel con la despiadada deforestación incluso con fuego para el agronegocio y la ganadería. Van envenenando sus órganos de producción de oxígeno, como los suelos y bosques, con agroquímicos para sembrar soya o la palma africana. Van dinamitando y perforando sus venas vitales, que son las vertientes de agua subterráneas y superficiales, para buscar petróleo. Van mutilando sus exuberantes montañas y las riberas de sus ríos, que fueron creadas para apreciar la belleza y la vida en abundancia. Esa abundancia de vida que hoy languidece porque las empresas mineras que se encubren en supuestas ‘cooperativas mineras comunitarias’ o actividades de ‘pequeña minería’ para no pagar impuestos o míseras regalías de 2,5 por ciento, están conectadas con empresas transnacionales chinas, brasileras, colombianas y grandes empresas nacionales”.

De la misma manera, Ruth aclara que estas políticas están sometiendo a los Pueblos Indígenas a la extrema pobreza. “El no tener agua significa extrema pobreza. Nada es posible sin agua”, advierte. “Entonces el proceso de extinción de la Amazonía se dará por los éxodos, porque los que ancestralmente la hemos habitado, cuidado, protegido y defendido saldremos a buscar afuera algo que ya no tenemos en nuestros lugares. O sufriremos un proceso de transformación para ser los destructores de nuestros propios territorios, porque nos obligarán a convertirnos en mineros o palmeros para intentar sobrevivir. Y así, una vez despojados de toda nuestra dignidad, de nuestras identidades, de nuestros principios y valores, de nuestra espiritualidad y veneración a la sagrada Madre Tierra, a nuestros ríos, a nuestras montañas, los bosques y territorios quedarán sin sus protectores que somos los Pueblos Indígenas.”

Pero, afortunadamente, dentro de este panorama cruel en cuánto al futuro de la Amazonía y sus pueblos, Ruth comparte su visión de esperanza, con los Pueblos Indígenas en lucha constante.

Así también, las nuevas generaciones están comenzando a replantearse qué futuro quieren. Para Ruth, en cuanto más jóvenes empiecen a entender que no es un derecho de quienes hoy vivimos despojarles de lo que a ellos les corresponde para vivir en un futuro muy próximo, la esperanza crecerá.

¡LUCHAR POR EL TERRITORIO ES Luchar POR LA VIDA!

¡Y VIVIR CON AUTODETERMINACIÓN ES UN DERECHO INEMBARGABLE DE NUESTROS PUEBLOS INDÍGENAS!

Artículo elaborado en base a entrevista con Ruth Alipaz Cuqui, Lideresa de la Nación Uchupiamona, Amazonía boliviana, e integrante de la Coordinadora Nacional de Defensa de los Territorios Indígenas Originarios Campesinos y Áreas Protegidas (CONTIOCAP) y a las siguientes fuentes de información:

- (1) [Izquierda Diario, Incendios forestales: los intereses agroindustriales ante la mirada tibia del gobierno](#), November 2023
- (2) Fundación Tierra, [Deforestación 2016-2021. El pragmatismo irresponsable de la “Agenda Patriótica 2025.”](#) June 2022
- (3) Rojas Calizaya, J; Anzaldo García, A., [El nuevo PLUS del Beni excluye a los actores y sus diversas visiones de desarrollo y atenta contra la Amazonía boliviana](#), Cipca, 2020
- (4) Cejis, [Análisis socioambiental del Plan de Uso de Suelo \(PLUS\) 2019 del departamento del Beni](#), 2020
- (5) RTP Bolivia, [Video: Engineer Javier Mamani Quispe, General Coordinator to foment production](#), January 2023
- (6) Ver Sección [“Aceite de Palma”](#) en el sitio web del WRM
- (7) Boletín WRM, [“Sin agua no hay vida”: los ríos en la Amazonía de Bolivia](#), septiembre 2022

Perú: Resistencia y organización comunitaria para la defensa de la selva

Comunidades indígenas de la Cuenca Amazónica peruana crearon una red para defender sus derechos territoriales y de autodeterminación. Su lucha no es sólo contra la deforestación, sino también contra los proyectos conservacionistas y de mercados de carbono -como los proyectos REDD- que generan más injusticia y conflictos internos.

La cuenca del río Putumayo abarca un área de 12 millones de hectáreas y representa el 1,7% de la cuenca amazónica. Su nacimiento está en Colombia y fluye delimitando gran parte de la frontera con Ecuador y Perú, hasta desembocar en el río Amazonas, en Brasil. Es uno de los pocos ríos amazónicos que aún fluye libremente.

Gran parte de esta cuenca, en particular en la región del Perú, abarca territorios indígenas y áreas protegidas que han sido creadas por los Estados desconociendo los derechos territoriales de los pueblos que viven en la región. Es además una zona donde aún hay extensas áreas de selvas intactas y en la que habitan Pueblos Indígenas en Aislamiento Voluntario.

Los Pueblos Indígenas que hoy día habitan la región del Putumayo enfrentaron lo que se dio a llamar como el genocidio del Putumayo, que tuvo lugar entre los años 1879-1913, durante la fiebre de la extracción del caucho. Se estima que cerca de 100.000 indígenas en la región amazónica fueron brutalmente explotados, abusados y torturados (1) por las compañías explotadoras de caucho.

La maldición de los recursos

Al igual que en otras áreas del Amazonas, la región de la cuenca del Putumayo sufre los terribles impactos de deforestación y degradación de los bosques, en particular como resultado de la minería y el maderero. En los últimos años, además, las mafias que controlan ambos negocios se han entremetido con las del narcotráfico y las guerrillas armadas (2). El resultado es el aumento de la presencia de bandas criminales armadas, a lo que se suma la ausencia del Estado para cumplir su rol de garantizar los derechos de los pueblos.

La tranquilidad en la que vivían las comunidades indígenas en las riberas del río Putumayo se está perdiendo. La violencia se ha vuelto un problema cotidiano. Los traficantes de drogas están usando la región para expandir los cultivos de coca, lo cual pone a los territorios indígenas bajo amenaza. Las comunidades no tienen posibilidad de negarse a que sus territorios sean invadidos por los narcos. Al mismo tiempo, la ausencia total de programas estatales dirigidos a generar alternativas de vida, sobre todo hacia los más jóvenes, hace que este grupo de la población se vea tentado de acceder a formar parte de bandas criminales.

Perú es el país con mayor área de bosque amazónico luego de Brasil. Ocupa, además, el tercer

lugar en cuanto a la tasa de deforestación, ubicándose por detrás de Brasil y Bolivia. Un informe reciente, estima que, en las últimas dos décadas, se perdieron más de 2.700.000 hectáreas de bosques, siendo una de las razones la expansión de las plantaciones de palma aceitera. (3)

Para complicar aún más el futuro de los bosques amazónicos y de las numerosas comunidades indígenas que han ocupado esos territorios milenariamente, a inicios de año, el Congreso de la República aprobó una serie de modificaciones a Ley Forestal y de Fauna Silvestre. Organizaciones indígenas y de la sociedad civil denuncian que la ley no sólo fue aprobada a las corridas sin respetar los tiempos parlamentarios, sino que además los cambios a la ley promueven la deforestación y facilitan el otorgamiento de derechos de sus bosques a favor de terceros. “Han violado nuestros derechos a la consulta y consentimiento previo libre e informado. Más grave aún esta modificatoria promoverá el despojo de nuestros territorios integrales ancestrales e incrementará las amenazas y la vida de los defensores indígenas ambientales, así como la vida e integridad biológica, cultural, ambiental y espiritual”, sostuvieron en una carta enviada a las autoridades del Congreso (4).

La Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDSESP), una organización que agrupa a numerosos pueblos indígenas amazónicos, divulgó un pronunciamiento en el que rechazan las modificaciones a la Ley Forestal. Entre sus argumentos, expresan que lo más lesivo de esta modificatoria es el cambio de uso de tierra con fines forestales y de tierras con fines de protección para fines agropecuarios, que se realizaba de manera excepcional y cumpliendo reglas técnicas. “Sin embargo, ahora se podrá realizar cambios ‘legalmente’ sin respetar criterios técnicos, haciendo impune el atentado contra los bosques, que nos protegen de los impactos de la crisis climática”, advirtieron (5).

Las modificaciones resultan en claros beneficios para los sectores agrícolas, como el de la palma aceitera, que ahora puede acelerar su expansión en la amazonía.

No obstante el difícil contexto, las comunidades que viven en la cuenca del Putumayo aún resisten y buscan caminos para poder permanecer en sus territorios.

WRM conversó con Arlen Ribeira, indígena del pueblo Witoto, en el Perú:

WRM: Arlen, cuéntanos un poco de ti

Mi nombre es Arlen Ribeira. Soy indígena del pueblo Witoto [también autodenominado como Muina Murui]. Vivo en la frontera del Perú con Colombia y todas mis generaciones anteriores han sido víctimas del período del caucho. Parte de nuestra familia que sobrevivió salieron desde La Chorrera, en Colombia, se escaparon y se asentaron a lo largo del río Putumayo para poder sobrevivir y no ser perseguidos por los patrones del caucho.

Desde muy niño he estado con mis abuelos y los adultos mayores, los sabios. He sido criado en maloca. La maloca es nuestra casa tradicional indígena, la casa de sabiduría. Entonces tengo un arraigo muy fuerte con la lucha de nuestros pueblos. He impulsado la protección territorial y

humana de los Pueblos Indígenas en Aislamiento y en Contacto Inicial y además he participado en numerosos eventos en el Perú, pero también a nivel internacional vinculados a la defensa del territorio.

WRM: Recientemente se ha creado la “Red de Territorialidades Indígenas de la Cuenca Amazónica para la Autodeterminación” (Red Tica). ¿Puedes contarnos de que se trata la Red y cuáles son sus objetivos?

Esta red recién empezó a tomar cuerpo el año pasado (2023). Nos reunimos cuatro federaciones que tienen muchas áreas naturales protegidas y donde habitan también (en sus territorios) Pueblos Indígenas en aislamiento y en contacto inicial.

Nuestras organizaciones que integran la Red Tica son la Federación de Comunidades Nativas Fronterizas del Putumayo y la Comunidad Matses, que está ubicada en Loreto y es la que tiene uno de los territorios más grandes, que incluye áreas protegidas. Integran la Red Tica también los hermanos Iskonawa de la Asociación Iskonawa para el Desarrollo, que están por la Sierra del Divisor. Y, por último, la Federación de Comunidades Nativas del Purus, que también tiene en su territorio el área protegida más grande del Perú; ellos están en Pucallpa, Ucayali.

Los territorios de todas estas comunidades y federaciones abarcan unas 13 millones de hectáreas [superficie equivalente al tamaño de Nicaragua]. Parte de nuestras reivindicaciones y de nuestra lucha es que queremos que se reconozcan todas esas áreas naturales protegidas, que se han creado por el Estado sin muchas veces tener conocimiento adecuado los Pueblos Indígenas, como nuestros territorios que nos fueron despojados. Que de alguna u otra manera se revierta la situación. O en su defecto, que pueda haber alguna norma que garantice nuestros derechos sobre dichos territorios, nuestras costumbres, nuestros lugares sagrados y nuestros derechos del uso del bosque que siempre hemos tenido como nuestra fuente de subsistencia.

Además de eso estamos viendo que hay una enorme lucha contra el cambio climático supuestamente emprendida por los Estados. Pero sobre el terreno, los que están luchando efectivamente contra el cambio climático somos los Pueblos Indígenas a través de nuestros bosques.

Nuestros territorios generan lluvias y estas lluvias van por diferentes lugares, llegan hasta Argentina, pasan por Brasil, y cruzan el mundo. O sea, cumple un rol muy importante.

Además, también nosotros queremos que en la lucha contra el cambio climático se reconozcan nuestros territorios y nuestros aportes. Pero no queremos los proyectos de carbono, como REDD (Reducción de Emisiones causadas por la Deforestación y la Degradación). No queremos el proyecto de carbono tal como está diseñado porque es una seria amenaza para la tenencia de nuestras tierras. Además, por la forma como está diseñado contribuye al calentamiento global, porque quiere decir que las empresas que están haciendo REDD no están disminuyendo sus emisiones.

Ellos están mandando cuidar los bosques pero siguen contaminando. Y este proyecto de REDD, como todos los negocios de carbono, viene amarrado con una serie de trampas en donde los Pueblos Indígenas pierden titularidad (de la tierra). La amenaza es el despojo territorial, de los recursos biológicos y de los derechos humanos y colectivos. Aparte, generan desplazamiento y hambre porque hacen contratos de 20 o 30 años sin pensar en el futuro de los pueblos. Y los recursos (económicos) que supuestamente generan los proyectos de carbono como REDD solo son mentiras, nada más. Los pequeños recursos que a veces llegan a las comunidades solamente generan división y conflicto interno entre sus integrantes. Y estos conflictos internos conllevan a que una parte de las familias adopten otro tipo de decisiones para negociar bosques.

Entonces lo que nosotros buscamos es garantizar nuestra propia autonomía. Esta autonomía indígena es la que ha venido contribuyendo a la sostenibilidad de la biodiversidad, de los bosques y de nuestro planeta. Quiere decir que a través de nuestros conocimientos nosotros somos los que estamos sosteniendo el planeta y lo que queremos es llamar la atención a los Estados, a la comunidad internacional. La solución climática la tenemos los Pueblos Indígenas, sin necesidad de destruir sociedades, sin necesidad de despojar territorios como ahora lo estamos viendo.

Entonces también mediante REDD se han creado muchas áreas naturales protegidas. Y esto es muy grave y en detrimento de nuestros derechos. Se deben considerar más las propuestas de los Pueblos Indígenas, por ejemplo en la Conferencia de las Partes sobre Cambio Climático, con la finalidad de hacer una lucha efectiva. Nosotros tenemos tantas áreas naturales protegidas y no tenemos acceso ni beneficio a los fondos climáticos, a los fondos de conservación. Ese es nuestro gran problema. Solo nuestros territorios ancestrales son unas 13 millones de hectáreas sobre las cuales se han creado áreas naturales protegidas y las cuatro federaciones no tenemos ningún tipo de beneficio en referencia a conservación, al cambio climático. Entonces, nosotros lo que buscamos es gobernar nuestros territorios. De manera autónoma, con libre determinación. En amparo también al Convenio 169 y a la Declaración Universal de los Derechos sobre los Pueblos Indígenas.

WRM: ¿Cómo llegó la Red Tica a formarse una posición contraria y crítica hacia las políticas REDD?

Bueno, yo he trabajado con nuestros hermanos de Purus, con los Matses y los hermanos Iskonawa. Hemos tenido conversaciones. Naturalmente pensando, ¿cuál es el rol que cumple nuestro territorio y por qué nos lo están quitando? Entonces vemos que hablan de tantos miles de millones de dólares y aparecen muchas ONGs en unión con el Ministerio del Ambiente, y ellos son los que han despojado nuestros territorios. Y luego, han efectuado talleres o congresos, y luego nos limitan el uso de nuestros territorios. Y nosotros nos preguntamos ¿por qué ocurren estas cosas? ¿A qué se debe? Entonces desde nuestro pequeño conocimiento, porque no tenemos mucho acceso a capacitaciones, hemos analizado que hay un negocio oscuro que nadie nos dice. Y este negocio oscuro es el carbono.

Por ejemplo, en el territorio de los Iskonawas, se ha creado el Parque Nacional Sierra del Divisor. ¿Cómo están participando los hermanos Iskonawas? Han partido sus territorios y ellos no tienen

acceso a recursos, se sienten despojados de su propio territorio y no tienen título de propiedad. Cuando ellos quieren establecerse en un área, los sacan de ahí. O sea, nos convertimos en nómades nuevamente. Nos quitan nuestros espacios y ya no podemos vivir en nuestro territorio ancestral.

Es así que hemos creado la Red Tica, pero este es un proceso largo, de fuerte lucha. Y hacemos nosotros un llamado a las instituciones a la solidaridad, a que nos apoyen. Porque al solicitar la reivindicación territorial nosotros también sufrimos amenazas, sufrimos también a las autoridades tanto de Perú y a las ONGs que se juntan y tratan de dividir nuestras organizaciones, de destruir nuestra unidad territorial con el propósito de que nosotros no podamos reclamar nuestros derechos.

A nosotros nos preocupa cómo vamos a vivir de aquí a 20, 30, 40, 50 años, si nos dejan cada vez más reducido nuestro territorio. Ya no vamos a poder satisfacer nuestras necesidades básicas como alimentación, la caza, la pesca y la recolección. Tampoco el Estado crea proyectos alternativos. Y encima, ingresan los madereros ilegales, los mineros ilegales, hacen carreteras sobre nuestros territorios indígenas, más áreas protegidas. Nuestro futuro está siendo muy incierto.

Y si ahora nosotros no nos paramos de pie con la ayuda solidaria para que nuestra voz pueda ser escuchada, va a ser muy duro el futuro para nuestras comunidades. Yo pienso de que va a haber más pobreza, más necesidad. Y ustedes saben que en la Amazonía del Perú no está presente el Gobierno. Nosotros no vivimos del Gobierno. Nosotros vivimos del bosque.

¿Y qué va a pasar más adelante cuando haya necesidad de hacer uso de más territorios ancestrales? Porque nosotros no hemos depredado la Amazonía, nuestros bosques lo hemos tenido siempre y en donde hay indígenas siempre ha habido bosques y sobre esos bosques que nosotros hemos conservado el Estado ya ha creado áreas naturales protegidas. Esto es nuestra enorme preocupación.

La posición de los gobiernos en la Cumbre de Belém

El año pasado hubo una reunión de los presidentes de la región Amazónica, la Cumbre de Belém, en Brasil, que emitió la Declaración de Belém. En ésta los presidentes plasman su visión sobre el futuro de la Amazonía y plantean la necesidad de continuar con el desarrollo como forma de combatir la pobreza, impulsar proyectos extractivos -agronegocio, minería, etc- para generar empleo, riqueza, etc. Afirman que es necesario combatir las actividades “ilegales”. Entonces, por ejemplo, no cuestionan la minería siempre que sea “legal”. Así, tenemos una de las mayores minas del mundo, de la empresa Vale, en medio de la Amazonía, con todas sus licencias y permisos vigentes. En paralelo, la declaración establece la necesidad de protección y las políticas del tipo REDD.

WRM: ¿Qué opinión te merece esta visión de los gobiernos de continuar apoyando el extractivismo “legal”?

Yo estuve en la Cumbre de Belém. Esta reunión fue declarativa, nada más. Imagínese usted, el Perú, uno de los firmantes de la declaración, acaba de aprobar una nueva ley forestal en la que prácticamente se autorizan los despojos, las invasiones territoriales. O sea, los gobiernos no cumplen y los gobiernos no mejoran las condiciones de la vida, al contrario, nos empobrecen. Ellos dicen: “vamos a desarrollar el Putumayo, vamos a hacer carreteras”. Las carreteras significan más pobreza para los indígenas, invasiones, criminalidad. Por la carretera llegan más mineros ilegales, taladores ilegales, narcotráfico, violencia, explotación humana, despojo territorial, migración de otras partes. La carretera le sirve al empresario para sacar todos los recursos que existen en un lugar...lo único que tenemos que hacer los indígenas es no creer en estas declaraciones, no confiarnos en este tipo de declaraciones. Más bien lo que nosotros tenemos que hacer es trabajar por nuestra autodeterminación, proteger nuestro territorio, nuestros derechos y de eso vamos a vivir nosotros. Como mi abuelo me dijo: “Yo no tengo plata, no tengo riqueza, hasta donde tú puedas mirar el bosque, por allá tú puedes andar, y de eso tú vas a vivir. Cuida y mira cómo hacemos nuestra chacra, tenemos abundancia, tenemos salud, no falta comida y no falta alimentos”. Esa es nuestra riqueza.

- (1) Thomson, N.; Pineda Camacho, R. [El libro rojo del Putumayo](#), 1913.
- (2) Rio de vida y muerte, [Rio Putumayo](#).
- (3) Environmental Investigation Agency (EIA), [New report exposes illegal Amazon deforestation as Peru approves scandalous ‘amnesty’ law forgiving past forest crimes](#), Febrero 2024
- 4) [Organizaciones indígenas nacionales rechazan la modificatoria de la Ley Forestal que atenta contra los derechos indígenas](#), Enero 2024
- (5) Pronunciamiento: [Rechazamos aprobación de la modificación de la Ley forestal y de fauna silvestre que vulnera derechos colectivos de los pueblos indígenas y pone en riesgo la Amazonía](#), Diciembre 2023

El Yasuní: Alcances de una victoria

La decisión del pueblo ecuatoriano de parar la extracción petrolera en el Parque Nacional Yasuní implica ahora nuevos desafíos: cómo recuperar un territorio sacrificado y hacer justicia en las zonas afectadas con la solidaridad del conjunto del país.

El 20 de agosto de 2023 el pueblo ecuatoriano fue a las urnas para unas elecciones anticipadas para elegir presidente y representantes a la Asamblea Nacional. Adicionalmente, hubo dos consultas populares: en Quito, para frenar la minería en el Chocó-Andino y, a nivel nacional, para dejar el petróleo en el subsuelo del llamado bloque ITT en el Parque Nacional Yasuní. Casi 60 por ciento de los votantes en Ecuador dijeron Sí al Yasuní. Esto significa que en el plazo de un año efectivo se tienen que cerrar los pozos petroleros, retirar la infraestructura e iniciarse un proceso de reparación de la zona afectada.

El Parque Nacional Yasuní es una de las áreas más biodiversas del mundo y hogar de Pueblos Indígenas, incluidos los Tagaeri y Taromenane que están en aislamiento voluntario. En el subsuelo del Yasuní también hay petróleo y sobre su territorio hay tres bloques petroleros. El bloque 16, que está en declive y que pasó de manos de REPSOL a la empresa estatal ecuatoriana, el bloque 31, que tiene muy poco crudo, y el ITT o bloque 43, bajo operaciones de la estatal de PetroEcuador. En 2016 se inició la extracción de sus campos que tenían reservas probadas de cerca de 900 millones de barriles de petróleo. Este petróleo es muy pesado. Su extracción requiere de mucha energía y en el proceso se generan elevadas cantidades de desechos de aguas tóxicas y otros contaminantes.

Por esta realidad y por la lucha de muchas organizaciones y colectivos, la victoria del Yasuní, sin duda, fue un triunfo muy esperado y conmovedor, pero como todo éxito genera desafíos.

El bloque 43, Ishpingo-Tambococha-Tiputini (ITT), en el Yasuní, es una zona en donde se ha construido un enclave petrolero que deberá ser desmantelado y sustraído del lugar. Pero ¿qué implica este retiro? ¿Cómo se recupera un territorio sacrificado? ¿Cuáles son las acciones de justicia para enfrentar los abusos cometidos contra la naturaleza y los pueblos en el Yasuní?

Como antecedente vale recordar que el 22 de agosto de 2013, diversos colectivos auto reconocidos como Yasunidos presentamos ante el Consejo Nacional Electoral del Ecuador una solicitud de consulta popular con la siguiente pregunta: “¿Está usted de acuerdo con que el gobierno ecuatoriano mantenga el crudo del ITT, conocido como bloque 43, indefinidamente bajo el subsuelo?”. Esta consulta popular buscaba proteger la vida y el territorio de los pueblos indígenas Tagaeri y Taromenane y de las comunidades de vida del Parque Nacional Yasuní.

Diez años más tarde, el 20 de agosto de 2023, después de superar todo tipo de obstrucción por parte del Estado, se realizó la consulta del Yasuní. Simultáneamente, se realizó una consulta regional en el Cantón Quito que buscaba prohibir actividades mineras en otra área megadiversa del país, como es el Chocó Andino. En esta consulta popular casi el 69 por ciento de los quiteños votaron por el Sí a la vida frente a la minería.

Aprendizajes

El debate sobre la consulta popular fue amplio. La disyuntiva de mantener el extractivismo o pararlo se volvió central durante el proceso electoral. A pesar de que la mayor parte de los candidatos y candidatas a la presidencia se mostraron abiertamente contrarios a mantener el petróleo bajo tierra y de que los grandes medios de comunicación mostraron una clara inclinación a convencer a la gente para votar negativamente, la respuesta a la consulta fue positiva, recibiendo el apoyo del 59 por ciento del electorado nacional. Ninguno de los candidatos recibió tanto apoyo.

De acuerdo con lo dispuesto en el dictamen 6-22-CP/23 de la Corte Constitucional, al ganar el Sí en la consulta por el Yasuní, el Estado está obligado a un retiro progresivo y ordenado de toda actividad relacionada a la extracción de petróleo en un término no mayor a un año efectivo desde la notificación de los resultados oficiales. El Estado tampoco podrá ejercer acciones tendientes a iniciar nuevas relaciones contractuales para continuar con la explotación del bloque 43.

La consulta del Yasuní nos deja varios aprendizajes:

- Las batallas son largas, difíciles, y se dan en muchas escalas. Pero sí es posible construir conciencia ecológica y social. Y podemos ganarle a las fuerzas retrógradas que imponen el culto al capitalismo y al extractivismo, punta de lanza de la acumulación y el despojo.
- La disputa por el futuro es el cuidado de la vida y la naturaleza, que no es ajena ni distante. Son los bosques y su gente, los ríos y los pueblos, los diversos seres y las relaciones en nuestros territorios. La naturaleza no es adversaria, es aliada. Los desastres actuales y los que se proyectan no son naturales, son una construcción hecha por acciones e inacciones globales y locales.
- Las transiciones -ya inevitables- tienen que incorporar en la agenda no solo el frenar las fronteras extractivas, sino recuperar los territorios sacrificados y restaurarlos. No es una batalla solo a lo venidero, es una batalla para reconstruir lo dañado, para recuperar la capacidad de autoregeneración de la naturaleza, la autodeterminación de los pueblos sobre los territorios y la autonomía en la solución de los problemas y conflictos.

Hubo varios intentos de desobedecer el mandato popular, así como afirmaciones de la imposibilidad de aplicarlo. El ex ministro de energía, del gobierno de Guillermo Lasso se adelantó a decir que "nunca en la historia del mundo se ha parado un campo tan importante que produce casi 60 mil barriles por día". Sin embargo, la empresa Petroecuador ya ha presentado el cronograma de cierre y plantea iniciarlo el 31 de agosto de 2024. Esto nos abre un tiempo para prepararnos para este proceso y para vigilarlo en el territorio.

El 2024 será un año de mucha actividad dentro del Yasuní. Está pendiente una visita de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el caso de los Pueblos en Aislamiento Voluntario, antes de emitir su sentencia por la falta de protección del Estado. Los pueblos habitantes del Yasuní están llamando la atención del incumplimiento de los derechos económicos sociales y culturales y de la dependencia de la industria petrolera.

También está la presión de los grupos de poder ligados a la industria petrolera que se resisten a perder una fuente de ingresos; se manejan cifras -sin ninguna explicación- sobre los costos del desmantelamiento y muchos hablan de nuevos escenarios de corrupción. No hay información sobre lo que la industria reconoce como “activos y pasivos” que deberán ser retirados.

El 2024 será un año de mucha reflexión y propuestas desde los luchadores y luchadoras por la vida y la naturaleza, seguramente con la complicidad y ayuda de la naturaleza misma. Momentos para repensar la construcción de la utopía y para reconstruir autonomía y soberanía. Tiempo para hacer justicia en las zonas afectadas por actividades petroleras con la solidaridad del conjunto del país, y sobre todo, tiempo para repensar desde abajo en los verdaderos costos e impactos de estas operaciones petroleras, desde la exploración hasta el retiro y reparación integral.

Cuando se habla de las operaciones petroleras, sabíamos que había una serie de estudios y procedimientos que las empresas debían presentar para obtener su licencia. Uno de estos estudios era el plan de abandono, lo que no sabíamos es que el “abandono” no es hundir plataformas, o dejar los pozos abandonados.

Una verdadera reparación del Yasuni-ITT debe significar retirar todo, para que quede como fue, antes de las actividades que nunca debieron realizarse. Se debe desmantelar la infraestructura, retirarla, rehabilitar los ecosistemas, restaurar, reparar, recuperar autonomía para los pueblos y para la naturaleza.

Esperanza Martínez

Acción Ecológica

Colombia: La “transición energética” pone en riesgo la cuenca noroccidental Amazónica

Mocoa se ubica entre las montañas andinas y la Amazonía colombiana, en medio de una de las cuencas hídricas más importantes del país, territorio donde conviven comunidades indígenas, afrodescendientes, campesinos y colonos. La creciente demanda de minerales para la “descarbonización” en el mundo pone a esta región en serio riesgo, ya que empresas mineras intentan avanzar con la extracción del cobre que hay en el subsuelo.

La transición energética (TE) es un reto importante para la humanidad en el presente siglo. Se catapultó como la estrategia ante la crisis climática, el calentamiento global, el desequilibrio planetario, la desaparición de especies, etc. Está en juego la vida y, de seguir el tren de consumo de los derivados de combustibles fósiles y de minerales que liberan CO₂ -principalmente en los países del Norte global y las elites del Sur-, el proceso autodestructivo será irreversible.

La TE no es nueva. En la historia está el registro de los cambios que los humanos fueron adoptando y adaptando para mejorar su bienestar: el roce de las piedras produjo el fuego y se pasó del consumo de alimentos crudos a deliciosos asados; los avances en los sistemas de transporte: vapor, ferrocarril, a motor y aéreo; y la industrialización condujo a la dependencia de combustibles fósiles. Durante el siglo XX, el desarrollo de nuevas tecnologías ha implicado un aumento progresivo del consumo de minerales, entre ellos, el cobre.

Por su parte, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha promovido que la TE sea asumida como un deber de todos los países mediante llamados a la reducción del consumo de combustibles fósiles y la disminución de emisiones de CO₂. Estos postulados en el país generan tensiones con el sector minero y de hidrocarburos, cuesta abandonar este modelo.

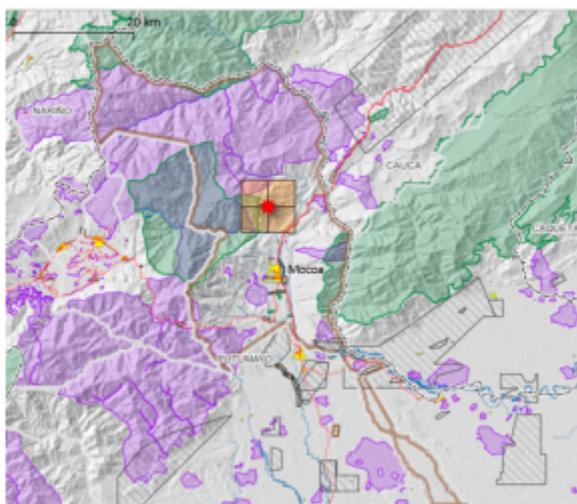
Por otro lado, cuando se habla de TE, se mencionan poco o nada las numerosas experiencias comunitarias que implican una verdadera soberanía energética. Estas contrastan con proyectos en desarrollo de mayor escala, que implican parques eólicos y de paneles solares; instalaciones que demandan grandes cantidades de minerales como el cobre y las tierras raras pero que, debido a que el proceso final de producción de energía no libera CO₂, son calificadas como “limpias”.

En este contexto se acentúa la demanda de minerales para la descarbonización en el mundo y la TE resulta en un discurso amenazante en la Cuenca noroccidental Amazónica, puesto que esta área se traslapa con uno de los depósitos de cobre del país. Actualmente, la empresa canadiense Libero Copper (en Colombia registrada como Libero Cobre) posee cuatro títulos mineros (imagen 1, color rojo) en procesos de exploración. En el imaginario colectivo se presume que el destino final sería la exportación del mineral.

El área de los títulos se encuentra a una distancia de 10 km del casco urbano de Mocoa, capital del departamento de Putumayo. Su proyección de explotación es de aproximadamente 4.600 millones

de libras de cobre y 511 millones de libras de molibdeno (1). Dichos títulos fueron adquiridos durante la presidencia de Álvaro Uribe (2002 -2010), en el periodo llamado “piñata minera”, en el que se vendieron grandes extensiones de tierra para el extractivismo minero-petrolero del país.

Antecedentes: La “piñata minera” (2002-2010)



- AGA (2004) – Mocoa Ventures (B2Gold, 2009) => Libero Cobre (2018)

- Proyecto Mocoa – 7800 ha – Fase del POA - de 4600 M de libras de cobre y 510,5 M de libras de molibdeno – Pit 177 ha

- Area Proyecto Licenciado (ANLA, 2022)
- Proyecto Mocoa de Libero Cobre
- Limite Mocoa (DANE, 2017)
- Títulos mineros vig. Putumayo (ANM, 2022)
- Areas Protegidas (RUNAP, 2023)
- Resguardo Indígena Legalizado (ANT, 2021)
- Area urbana (DANE, 2021)

Mocoa: una ciudad Andino-Amazonica

En la frontera sur-occidental del país se encuentra Mocoa, a una distancia de 630 km de Bogotá. La ciudad se destaca socio-ecológicamente como biocultural, con aproximadamente 63.639 habitantes que representa el 16,6% del total departamental; constituido étnicamente por indígenas, afrodescendientes, campesinos y colonos. Territorialmente hay cinco resguardos indígenas: Inga Condagua y Yunguillo; Inga-Caméntsá; La Paila Naya; Inga y koreguaje, y La Florida -Nasa; además de cabildos de los pueblos Siona, Yanacona, Pastos, y cinco Consejos Comunitarios de afrodescendientes.

El territorio es una amalgama de culturas donde lo ancestral se expresa: algunas familias emplean semillas, fibras y arcilla en la fabricación de productos artesanales para el sustento económico. También se vive del turismo de naturaleza, de la producción agropecuaria y, en lo urbano, del sector servicios y del comercio.

Geográficamente Mocoa se ubica en la confluencia entre el Macizo y la Amazonía, esta área es uno de los territorios más importantes en nacimientos de agua del país, conocido como la estrella hídrica (2). Además, comparte con el municipio de San Francisco el área de la Reserva Forestal Protectora de la Cuenca Alta del Río que lleva su nombre, Mocoa (RFPCARM). Reserva ecoestratégica porque es el corredor que conecta varios Parques Nacionales Naturales (PNN) y Reservas Ambientales; ellos son: el PNN Alto Fragua Indi Wasi, PNN Puracé, PNN Complejo Volcánico Doña Juana – Cascabel, PNN Cueva de los Guacharos, Laguna de la Cocha, Santuario de

Flora y Fauna Galeras, Santuario de Flora Isla de la Corota, Reserva Natural Paway Mariposario y el Santuario de Flora Plantas Medicinales Orito Ingi-Ande.

El territorio está atravesado por 21 fuentes hídricas, ocho ríos y 13 quebradas (3), que conforman el abanico del río Mocoa. Éste a su vez alimenta la cuenca Alta del río Caquetá, tierra de bellos paisajes, constituido por zona de páramo, terrazas y valles de riqueza sedimentaria y una biodiversidad esplendorosa. Sus montañas sirven de refugio de especies en vía de extinción como el oso negro de anteojos, la danta de paramo y el jaguar (4). También, la especie *Elaeagia pastoensis* o árbol conocido popularmente como mopa-mopa, del cual se extrae el barniz, materia prima que emplean los artesanos de Pasto (Nariño). (5) Estas especies están catalogadas en estado vulnerable a la extinción debido a la pérdida de hábitat y otros factores.

Mocoa, al estar ubicada en la transición Andino-Amazónica, goza de unas condiciones atmosféricas especiales. Entre ellas, un clima cálido-húmedo con precipitaciones que superan los 4.000 milímetros anuales, una geografía de altas pendientes que van desde los 600 a los 3200 metros sobre el nivel del mar y suelos geológicamente jóvenes en formación, lo cual marca a esta región como zona de erosión activa.

El territorio Andino Amazónico bajo amenaza

Desde hace más de cuatro décadas se adelantan estudios sobre el potencial mineral en Mocoa. Para la década del '70 se ejecutó un convenio entre el antiguo Instituto Nacional de Investigaciones Geológico-Mineras (INGEOMINAS) y Naciones Unidas. La Tabla adjunta es el resumen del informe realizado en 31 pozos perforados sobre la margen derecha del río Mocoa.

Variable		Diseño		
		Cielo Abierto	Subterráneo	Combinado Cielo Abierto
Reservas	Ton met	203.666.000	222.852.000	204.616.000
Tenor %	Cu	0,4319	0,3837	0,4045
	Mo	0,0621	0,0670	0,0700
Operación	Diaria (Ton)	30.000	30.000	30.000
	Anual (Ton)	10.500.000	10.500.000	10.500.000
Vida Mina	Años	21	23	8
Preproducción	(Años)	5	5	5

Fuente: INGEOMINAS Informe No 1891, de 1982.

La proyección del Informe de INGEOMINAS preocupa en consideración con la alta fragilidad ambiental de Mocoa, ya que, contradictoriamente, sus bondades también implican riesgos. El abanico hídrico, la geo-morfología joven del suelo y, además, el estar ubicado en la zona de

transición está entre placas tectónicas -debido a lo cual está atravesada por fallas geológicas- lo ubica como proclive a los impactos del cambio climático.

El Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático realiza llamados permanentemente sobre la degradación del planeta y que las afectaciones serán más evidentes en territorios de alta fragilidad ambiental. De ello fuimos testigos el 31 de marzo de 2017, cuando se desató la Tragedia de Mocoa: una avenida torrencial inundó 17 barrios, cinco fueron completamente destruidos. La avalancha dejó más de 333 muertos, 398 personas gravemente heridas y 71 desaparecidas según los registros oficiales (6). Sin embargo, la población habla de cifras mayores. En los barrios destruidos vivían víctimas del desplazamiento forzado, en su gran mayoría; y como en todas las ciudades del mundo, estos migrantes son quienes ocupan los márgenes de la ciudad.

Posteriormente, a un año de la tragedia en el mes de abril, los presidentes de las Juntas de Acción Comunal (JAC) de las veredas de Pueblo Viejo y Montclar fueron informados que la empresa canadiense B2 Gold realizaría trabajos de explotación y necesitan la licencia social, para lo cual los instan a reunir a la comunidad. Ante esta amenaza y con la memoria viva del desastre, el 5 de mayo de 2018, la ciudadanía de Mocoa realizó una gran movilización acompañando a los presidentes de las JAC de la zona para manifestar el total rechazo y el desacuerdo frente a la pretendida explotación de nuestras montañas. Entre otras razones, porque parte de los títulos mineros se superponen con los territorios colectivos de los Resguardos Inga de Condagua y el Resguardo Camëntsa de San Francisco.

Como respuesta política a esta movilización el Consejo Municipal aprobó el Acuerdo 020 de 2018, que reza lo siguiente: “El Municipio de Mocoa debe asumir como prioridad la política de protección al medio ambiente lo que implica de manera explícita la prohibición de actividades mineras teniendo presente” estos hechos [y sigue] “Que debido a la magnitud de la tragedia debe conllevar a que el Gobierno Municipal atienda los principios de precaución, prevención, rigor subsidiario y progresividad”.

Mimetismo empresarial

Como se menciona líneas arriba, la “piñata minera” implicó que el subsuelo de este territorio aparezca en manos de empresas canadienses: Mocoa ventures, B2 Gold e incluso algunas con nombres que suenan a territorio, como “Proyecto Mocoa”, de Libero Cobre. Debido a que a B2 Gold, que operaba bajo la subsidiaria Mocoa Ventures, se le venció el plazo de exploración y no consiguió la licencia social, vendió los títulos a Libero Copper Corporation, empresa que adquirió la participación del 100 por ciento del “Proyecto Mocoa” el 7 de mayo de 2018.

El ingreso de Libero Cobre representó una mayor amenaza de posible explotación para las organizaciones defensoras y la ciudadanía. Sus acciones han generado vulneraciones y violación de las normas locales, puesto que han pasado por encima del Acuerdo municipal 020. Al mismo tiempo, han fracturado el tejido social con la cooptación de parte de la población de la zona con la oferta de empleo, el uso de niños y niñas en publicidades de la empresa y otros impactos, que llevaron a institutos como el Observatorio de Conflictos Ambientales (OCA), de la Universidad

Nacional de Colombia, y al Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas (SINCHI) a catalogar este caso como un conflicto socioambiental.

Resistencias ante el extractivismo

Para las organizaciones sociales, la pretendida explotación generará daños ambientales incalculables y no sería posible la vida en el territorio. Como ciudadanía, nos hemos juntado en una alianza como Colectivo Guardianes de la Andino Amazonía y, con el apoyo de Ongs de Bogotá, se han realizado movilizaciones, audiencias públicas, requerimientos a las entidades de control y a la autoridad ambiental. También la realización de eventos culturales: la primera y segunda versión del Festival del Agua, la Montaña y la Vida (2022; 2023).

A modo de cierre, vale destacar que este caso de pretensión de extractivismo de cobre en la Amazonía colombiana cada día se hace más visible, al punto que hemos logrado ponerlo en las agendas de los Ministerios de Ambiente y Desarrollo Sostenible, de Minas y Energía. Y estamos a la espera de que se instale una mesa que, por sentencia del Consejo de Estado, deberá poner límite al desorden minero del país, además de concretar lo propuesto en el Plan Nacional de Desarrollo del actual gobierno: ¡Ordenar el territorio alrededor del agua! (7)

Constanza del Pilar Carvajal Vargas

Activista socioambiental y académica.

Colectivo Hilos de Vida – Guardianes de la Andino- Amazonía.

Con la colaboración de: Lucia Barbosa Diaz y William Mauricio Rengifo Velasco.

(1) Michel Rowland, Robert Sim and Bruce Davis in: [Liberio Copper & Gold Corporation](#). Vancouver, British Columbia, Canada, enero 2022. Consultado en enero 2022.

(2) En el Macizo nacen los Ríos: Magdalena y Cauca, atraviesan el país de sur a norte hasta el Océano Atlántico; el Río Patía va al occidente al Océano Pacífico; y, el Caquetá al oriente amazónico ingresa a Brasil hasta el Río Amazonas. Y en las estribaciones del Nudo de los Pastos, en el municipio de San Francisco nace el Río Putumayo que recorre aproximadamente 840km., sus aguas son la divisoria fronteriza internacional de nuestro país con Ecuador y Perú, e ingresa al Brasil donde aporta su caudal al Amazonas.

(3) POMCA, Mocoa 2022.

(4) Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).

(5) La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura ([UNESCO](#)), reconoció los “Conocimientos y Técnicas asociados al Barniz de Pasto Mopa-Mopa” como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. El 21 de diciembre de 2020.

(6) Tragedia de Mocoa: ¿por qué condenaron a la Nación? El Tribunal Administrativo de Cundinamarca condenó al Estado por lo ocurrido en marzo de 2017. Noticia virtual del 14 de julio de 2022

(7) Departamento Nacional de Planeación. [El agua, eje central para hacer de Colombia “una potencia mundial de la vida”](#), marzo 2023.

Las contradicciones de la conservación: El territorio del pueblo Ka'apor, en la Amazonia brasileña

El pueblo Ka'apor vive en Alto Turiaçu, en el noroeste del Estado de Maranhão, en Brasil. Es el territorio indígena más grande de la Amazonia Oriental y, también, la porción de selva preservada más grande en esa región. Allí llegaron empresas extranjeras a proponer proyectos REDD, que generan conflictos y el rechazo de una parte de la comunidad, que se organiza para resistirlos.

La porción oriental de la Amazonía en Brasil presenta las mayores tasas de deforestación y degradación de la selva en el país. No obstante, en ese vasto territorio aún se encuentran amplias áreas en buen estado de protección, que como corroboran estudios científicos en diversos lugares del planeta, suelen corresponder a territorios de Pueblos Indígenas y/o comunidades locales (1). Una de esas áreas es el territorio indígena Alto Turiaçu donde vive el pueblo Ka'apor, que se extiende por 530.524 hectáreas en el noroeste del Estado de Maranhão, distribuido en seis municipios. Allí se asienta una población de aproximadamente 2.600 personas, distribuidas en 20 comunidades. Este es el territorio indígena más grande de la Amazonia Oriental y, también, la porción de selva preservada más grande en esa región.

Del cuidado del territorio: ¿Quién enseña a quién?

El cuidado del bosque, llamado desde la academia y otros sectores sociales como conservación, está basado, entre otros, en valores y relaciones profundas con los territorios: valores culturales, de uso, espirituales y políticos. Sus conocimientos y prácticas tradicionales les han permitido, al mismo tiempo, hacer uso y cuidado del territorio. Se trata de saberes y conceptos que no son estáticos, sino que, por el contrario, evolucionan a la par que sus culturas y se adaptan y responden a las necesidades que van surgiendo. De esa manera, por ejemplo, el pueblo Ka'apor creó estrategias de monitoreo y auto-vigilancia.

Las amenazas externas a los Ka'apor no han sido pocas. A lo largo de los años se ha incrementado la invasión de su territorio, inclusive con funcionarios públicos involucrados en la agresión, arrendamiento, uso de documentos falsos para apropiación indebida del territorio indígena. Frente a ello, en 2012, una parte significativa de líderes y lideresas de las aldeas se unieron y comenzaron a realizar acciones de auto-vigilancia. Establecieron pequeñas comunidades en las entradas de los caminos usados por los madereros, que posteriormente denominaron áreas de protección o *ka'a usak ha*, en su lengua. Esta fue una de las experiencias exitosas que neutralizó la agresión e invasión de su territorio.

En septiembre de 2013 los indígenas crearon la primera área de protección en el municipio de Centro Novo do Maranhão, donde decidieron, en diciembre de ese mismo año, retomar un sistema de organización denominado *Tuxa Ta Pame* o Consejo de Gestión Ka'apor. "Es una forma de organización ancestral y colectiva del pueblo, que se remonta y hace referencia a los antiguos

Tuxa o guerreros, los cuales dejaron marcas en la historia por haber luchado, entregado la vida, ser maestros de saberes y cultura, estrategias en la defensa del pueblo y la cultura”, explicaron miembros del Consejo en una entrevista con el WRM. En dicho sistema no hay mandatarios, jefes, caciques o poder, las decisiones no son centradas en un líder, pero sí en la colectividad, en los grupos y colectivos. “Todos son importantes y poseen un protagonismo en la defensa [del territorio]. Cuando se tiene una acción de autodefensa va el grupo, nadie dice que mandó, pero todos quienes se sintieron amenazados van al enfrentamiento”, señalaron.

También se estableció el *Jupihu Katu Ha*, acuerdo de convivencia Ka’apor, creado con la intención de contribuir a la unidad y ejercer la gobernanza colectiva y responsable. La organización creada en torno al *Tuxa Ta Pame* está fundamentada en decisiones consensuadas, horizontales y participativas.

Es necesario destacar la relevancia que entrañan esas decisiones en términos de autonomía y soberanía. Las formas de gobierno y organización propias e inclusivas, distanciadas de modelos como el de las democracias representativas, dan cabida a las voces y participación de los diferentes sectores su pueblo. Un ejemplo de ello es la guardia de autodefensa Ka’apor, constituida por las familias, las mujeres, los ancianos, los niños, incluso los animales domésticos. Todos poseen una responsabilidad y una tarea para ser llevada a cabo. Es decir, el territorio es pensado, vivido, disfrutado, apropiado y defendido por todas y todos.

Con el tiempo y el incremento de las agresiones y amenazas, las acciones de defensa territorial fueron expandiéndose. Se implementaron nuevas formas de protección con auto-vigilancia instaladas y se llevó a cabo el mapeo participativo de los ecosistemas bioculturales Ka’apor. Inclusive han adoptado e implementado el sistema de *agroflorestas sintrópicas*, un sistema agrícola y productivo creado hace pocas décadas que imita a la selva en su organización, sobre todo para reducir los insumos externos, acumular y disponer la energía. Todo ello a la par de acciones solidarias en materia de educación y salud.

Sin embargo, a medida que aumentaron las acciones de auto-vigilancia, aumentaron las agresiones y asesinatos, hechos en los que se encuentran involucrados madereros, hacendados, cazadores, comerciantes y políticos locales. En los últimos diez años, más de 50 personas han sido agredidas, dos comunidades han sido invadidas y hubo cerca de 15 asesinatos.

A pesar de todo ello, la selva que cuidan los Ka’apor permanece casi intacta. Recientemente, actores ajenos y desconocedores de dicho territorio han llegado supuestamente para enseñar a este pueblo como hacer lo que por siglos ha venido haciendo, proteger su territorio, esta vez bajo la modalidad de un proyecto REDD. Esto nos remite a las siguientes preguntas: ¿quién tendría que aprender de relación con la selva y cómo cuidar de ella? ¿Han venido realmente con la intención de cuidarla?

Llegada de la propuesta REDD y los impactos anticipados

A comienzos de 2023, las empresa Wildlife Works y la ONG Forest Trends, ambas de Estados Unidos, arribaron al territorio con la propuesta de implementar un proyecto REDD (Reducción de Emisiones causadas por la Deforestación y la Degradación) para generar y vender créditos de carbono. Llegaron a través de indígenas del Estado de Pará.

En el territorio existe otra organización, la Asociación *Ka'apor Ta Hury* del Río Gurupi, que tiene la figura de un cacique, con quien la empresa y la ONG han establecido mayor comunicación. Esta asociación, que no representa a la totalidad del pueblo indígena, dice estar de acuerdo con el proyecto, el cual plantean podría mejorar su calidad de vida y proporcionar recursos para complementar las actividades de protección. Al momento, existe un memorando de entendimiento firmado. Este documento es denunciado por el *Tuxa Ta Pame* porque ni la empresa ni la ONG les escucharon en el proceso que llevó a la firma.

Tal como sucede en muchos otros territorios alrededor del planeta, donde se concentran las selvas mejor protegidas, éstas son objeto de disputa para proyectos de créditos de carbono forestal y Pueblos Indígenas y comunidades locales sufren los impactos, con solo el arribo del anuncio, en especial las disputas y divisiones internas.

Los miembros del pueblo en desacuerdo con la propuesta se oponen porque el proyecto REDD mercantiliza su modo de vida e incrementa los conflictos internos. Esto lo conocen de primera mano, pues ya sufrieron una experiencia similar con un proyecto de comercialización de madera seca que tuvo lugar entre los años 2006 y 2013. En ese caso se sintieron engañados por el propio Estado, el gobierno federal e inclusive la Fundación Nacional del Indio (FUNAI), actores que les involucraron en el proyecto de comercialización, que terminó dejando disputas, muerte y sufrimiento, lo cual no quieren repetir de nuevo (2). Infortunadamente, la presencia de los actores externos y su propuesta de proyecto ya ha generado conflictos y profundizado divisiones entre el pueblo Ka'apor.

Debido al tenor de la situación, ya se ha hecho una denuncia ante Ministerio Público Federal (MPF), entidad que ha expresado que cualquier proceso que envuelva la consulta previa requiere dialogar con los dos grupos y el consenso debe llegar a buen término para ambos. (3).

Al consultar a Beto Borges, representante de Forest Trends, cuál sería la posición de la ONG en caso de no obtenerse el consenso al interior del pueblo Ka'apor, afirmó que el proyecto no debería continuar, lo que da cuenta de la relevancia del consenso en una decisión de esta trascendencia. Ahora bien, la respuesta del representante de Wildlife Works, Lider Sucre, difiere ampliamente, ya que no da relevancia al consenso. En lugar de ello, enfatiza en la decisión del colectivo: “Nunca habrá unanimidad absoluta. En un proceso comunitario siempre hay diferentes puntos de vista. Al final del proceso, acataremos la decisión del colectivo, ya sea a favor o en contra” (4). Lo anterior remite inmediatamente a la pregunta de ¿qué entiende el directivo como decisión del colectivo?, pues ya existe una decisión de una parte del colectivo, la cual rechaza el proyecto.

Como suele ser el modus operandi de estas organizaciones, Forest Trends y Wildlife Works han empezado a difundir información parcializada sobre REDD, al mismo tiempo que hay informaciones muy relevantes que no fueron socializadas. Por ejemplo, no se ha informado sobre las irregularidades, denuncias e impactos de otros proyectos REDD en los que Wildlife Works participa en República Democrática del Congo y Camboya (5). Mucho menos se le ha mencionado al pueblo Ka'apor las denuncias recientes de uno de los proyectos de tipo REDD que implementó Wildlife Works en Kenya.

En noviembre de 2023 el periódico The Guardian (6) publicó un reportaje basado en la investigación realizada por la Comisión de Derechos Humanos de Kenya y la ONG SOMO (7), la cual da cuenta de la denuncia contra funcionarios de la empresa Wildlife Works en el proyecto Kasigau, en Kenya. Altos cargos han sido acusados recientemente de abuso y acoso sexual, cometidos durante más de una década. Hombres vinculados a la empresa se valían de su posición para exigir sexo a cambio de ascensos y mejores tratos. La investigación llevada a cabo por una firma de abogados keniana halló pruebas de "comportamiento profundamente inapropiado y perjudicial" por parte de dos personas.

El propio presidente de Wildlife Works, Mike Korchinsky, pidió disculpas por el dolor causado y reportó que tres personas fueron suspendidas, enfatizando que no se trata de un problema generalizado. A ese respecto, es preciso subrayar que, frente a estas, y otras, violaciones de derechos, en el marco de este tipo de proyectos (8), suele escucharse que se trata de casos aislados, cuando la reiteración de los hechos a lo largo del tiempo hace pensar en un carácter sistemático.

El problema fundamental detrás de estas gravísimas situaciones es que los proyectos REDD se fomentan y promocionan como una intervención exclusivamente positiva para las comunidades y los territorios, sin mencionarles el historial de impactos negativos. Es decir, se oculta información esencial -completa, veraz e imparcial- a las personas que se enfrentan a la toma de una decisión sobre un proyecto en su territorio.

¿Cuál ha sido la respuesta del *Tuxa Ta Pame* del pueblo Ka'apor?

Al identificar la amenaza, el *Tuxa Ta Pame* determinó que era necesario buscar mayor información que permitiese entender de manera integral de que se trata el mecanismo REDD, cómo funciona, en qué está basado y cuáles serían las implicaciones para la población y el territorio.

Después de iniciar su propio proceso de investigación, los actores externos llegaron para entregar una explicación simplista y parcializada sobre lo que es REDD y la generación de bonos de carbono para financiar el proyecto, del cual se afirma que empezaría a dar beneficios con solo firmar las listas de asistencia a las reuniones. Pero miembros del pueblo Ka'apor vienen investigando, buscando otros puntos de vista y sobre todo conociendo la experiencia de otros pueblos con una posición definida al respecto. De esta forma ha llegado a sus propias conclusiones.

El consejo *Tuxa Ta Pame* y las comunidades organizadas en torno a éste entienden a REDD como “un mecanismo capitalista para camuflar y mantener el mundo contaminado y a los territorios amenazados en su autonomía. Porque transfiere responsabilidad del poder público al poder privado. Porque divide opiniones, monetiza los bienes naturales. Siempre defendemos el territorio porque creemos que él es nuestra vida. Nunca necesitamos recibir dinero para vivir y proteger la selva” (9).

En base a esta definición de REDD, decidieron llevar el tema al interior de sus procesos escolares y formativos, los cuales tienen lugar en tres núcleos de formación que orientan cinco centros de cultura y educación comunitaria Ka’apor. El tema pasó a ser parte del contenido de las actividades escolares y formativas, para lo cual elaboraron cartillas de conocimientos bilingües. Al finalizar el 2023 llevaban siete meses realizando actividades de formación que llevaron a la iniciativa de crear un protocolo autónomo comunitario Ka’apor, ahora en construcción.

¿Qué se requiere entonces para que la selva siga existiendo?

Garantizar condiciones para la permanencia del pueblo Ka’apor en su territorio, de manera segura y adecuada, lo que implica, entre otras cosas, respetar las formas propias de organización política, toma de decisiones y gestión de su territorio y medios de vida. Debe subrayarse, nuevamente, que los proyectos tipo REDD, a menudo causan conflictos e impactos sin ni siquiera estar aprobados o en ejecución, generalmente se establecen en áreas con buen estado de protección de sus ecosistemas, como es el caso del Alto Turiaçu. Esas condiciones las ha garantizado el pueblo Ka’apor, basado en sus conocimientos, prácticas y relación con el territorio, sin necesidad de proyectos externos o mecanismos de mercado que condicionen u ordenen lo que debe ser hecho, según lo que indican quienes promueven tales proyectos y mecanismos.

Artículo elaborado por el Secretariado del WRM con base en entrevista realizada con miembros del Consejo de Gestión Ka’apor *Tuxa Ta Pame*.

(1) Porter-Bolland L. et al, 2012. Land use, cover change, deforestation, protected areas, community forestry, tenure rights, tropical forests. Forest ecology and management. Vol 268:6-17

(2) Video: [Intercept Brasil, Empresa americana alimenta conflicto indígena para lucrar com reparaçã ambiental](#), 2023.

(3) Article: [Intercept Brasil, Empresa americana alimenta conflito indígena para lucrar com reparaçã ambiental](#), 2023.

(4) Idem 3

(5) [REDD-Minus: the rethoric and reality of the Mai-N’ dombe REDD+ Programme](#), 2020; [Fortress conservation in Wildlife Alliance’s Southern Cardamom REDD+ Project: Evictions, violence, and burning people’s homes](#). “We’re proud of our work. The forest, the wildlife, you come to feel they’re yours”. 2021.

(6) The Guardian, [Allegations of extensive sexual abuse at Kenyan offsetting project used by Shell and Netflix](#), November 2023.

(7) SOMO, [Offsetting human rights. Sexual abuse and harassment at the Kasigau Corridor REDD+ Project in Kenya](#), November 2023.

(8) WRM, [15 años de REDD: Un mecanismo intrínsecamente corrupto](#), abril 2022.

(9) Entrevista a miembros del Consejo de Gestión Ka’apor *Tuxa Ta Pame*.

RECOMENDADOS

Pueblos Indígenas en aislamiento en Perú: Cómo el FSC aplica el manual de las grandes petroleras

Este artículo describe cómo a lo largo de una década, el Forest Stewardship Council (FSC) viene certificando dos concesiones madereras de la empresa Maderera Canales Tahuamanu (MCT) en la región de Madre de Dios, que incluye territorios de Pueblos Indígenas en aislamiento, conocidos como el “Mashco Piro”. La empresa certificadora ha hecho la vista gorda ante el hecho de que el gobierno peruano no sólo no ha demarcado el territorio indígena sino que le ha otorgado a la empresa dos contratos de concesiones. El hecho de que el FSC afirme que las concesiones de la compañía no son parte de los territorios Mashco-Piro recuerda lo que ciertas compañías de petróleo y gas hacen cada vez más “en un intento por defender sus operaciones en partes de la Amazonia remota, habitada por Pueblos Indígenas en 'aislamiento': dicen que no existen, o que no hay evidencia de ellos, o que no utilizan las áreas donde opera la empresa.” [Lea el artículo en inglés aquí.](#)

Brasil: Dossier de la articulación Agro es Fuego

La articulación “Agro é Fogo” (Agro es Fuego) reúne en Brasil a movimientos sociales, organizaciones y pastorales que trabajan desde hace décadas en defensa de la Amazonia, el Cerrado y el Pantanal y de los derechos de sus pueblos y comunidades. Su objetivo es denunciar cómo el agronegocio utiliza el fuego asociado directa o indirectamente a los procesos de deforestación y acaparamiento de tierras, buscando promover y consolidar la expansión de la frontera agrícola. En los años recientes, la articulación produjo el Dossier: “Agro es Fuego: Acaparamiento de tierras, deforestación e incendios en la Amazonia, el Cerrado y el Pantanal”. Una amplia red de colaboradores participó de diversas maneras: los líderes de los territorios que aportaron sus relatos de los conflictos; los fotógrafos que proporcionaron fotos de sus colecciones; los cartógrafos y especialistas en geoprocésamiento que organizaron los mapas; y las personas que participaron en la coautoría de los artículos. Este dossier también ofrece un análisis de lo que está ocurriendo en los ecosistemas compartidos de países vecinos, como Paraguay y Colombia, y la relación con sus sistemas políticos. [Accede aquí en español.](#)

Voces indígenas de la Amazonia

La producción de herramientas audiovisuales, videos y podcasts en la Amazonia, en los que los Pueblos Indígenas hablan de sus realidades y luchas de resistencia va en aumento. Agenda Propia, por ejemplo, es un colectivo de periodistas, en su mayoría mujeres, que trabajan en la región amazónica y promueven la Red Tejiendo Historias, una comunidad de narradores con quienes realizan diversas producciones. Mediante el enlace que compartimos, se pueden escuchar ocho historias de Pueblos Indígenas de la región amazónica venezolana y fronteriza con Colombia, que hablan de sus realidades, como el desalojo por las actividades mineras, los conflictos con grupos armados, la deforestación, pero también de su resistencia mediante la creación guardias en sus territorios. [Acceda aquí.](#) Agenda Propia también produjo un especial sobre las mujeres en resistencia en la Amazonia colombiana. [Acceda aquí.](#)

Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales (WRM)

De un boletín del WRM publicado en 2022, recomendamos nuevamente un video producido por un colectivo audiovisual dirigido por tres jóvenes indígenas Munduruku en Brasil, que utiliza las redes sociales para concientizar sobre las invasiones ilegales a su territorio. En inglés [aquí](#). En portugués [aquí](#).

**Todos los artículos del Boletín pueden ser reproducidos y difundidos con la siguiente fuente:
Boletín 268 del Movimiento Mundial por los Bosques tropicales (WRM): “La Amazonia: Luchas de las comunidades frente a viejas y nuevas amenazas” (<https://wrm.org.uy/es/>)**

[Suscríbete al Boletín del WRM](#)

*El Boletín busca apoyar y contribuir con las luchas de los pueblos
en la defensa de sus territorios y bosques.
La suscripción es gratuita.*

¿Te perdiste la edición anterior del boletín del WRM
“La estafa verde: opresión, conflictos y resistencias”
[Puedes acceder a todas las ediciones pasadas del boletín del WRM en este link](#)

Boletín del Movimiento Mundial por los Bosques (WRM)
Este boletín está disponible también en inglés, francés y portugués

Secretariado internacional del WRM
Av. Bolivia 1962 Bis, CP 11500 Montevideo, Uruguay
Teléfono y fax: 598 26056943
wrm@wrm.org.uy
<http://wrm.org.uy/es>